



**Ministerio del Interior y Justicia
Dirección Nacional de Estupeficientes**



**Universidad del
Rosario**

El narcotráfico en las relaciones fronterizas de Colombia

**Alejandro Reyes Posada
Liliana Duica Amaya**

**Centro de Estudios y Observatorio de Drogas y Delito
Universidad del Rosario**

Bogotá, Febrero de 2006

Estudio realizado para la Dirección Nacional de Estupeficientes. El contenido del estudio y las opiniones y recomendaciones expresadas son responsabilidad exclusiva de los autores y no comprometen a la Dirección Nacional de Estupeficientes del Ministerio del Interior y de Justicia del gobierno de Colombia. Agradecimiento a Luis E. Alvarado, funcionario de la DNE por sus comentarios y seguimiento en el proceso de recolección de información y análisis.

Índice

I.	Introducción	3
II.	Metodología	4
III.	Una tipología esquemática de las zonas fronterizas.	6
IV.	El narcotráfico en las fronteras terrestres con Venezuela, Brasil, Perú y Ecuador	8
1.1.	Frontera con Venezuela	8
1.1.1.	La Guajira	12
1.1.2.	Norte de Santander	16
1.1.3.	Arauca	22
1.1.4.	Vichada	28
1.2.	Frontera con Brasil	35
1.2.1.	Amazonas	36
1.3.	Fronteras con Ecuador y Perú	40
1.3.1.	Putumayo	43
1.3.2.	Nariño	46
2.	Los problemas del narcotráfico en las fronteras terrestres	53
2.1	Los impactos regionales del narcotráfico	53
2.2.	Efectos destructivos del narcotráfico	57
2.3.	El narcotráfico y la política de seguridad	59
2.4.	Las relaciones de cooperación fronteriza con los vecinos	65
3.	El lavado de activos en las fronteras	69
V.	Anexos	83

El narcotráfico en las relaciones fronterizas de Colombia¹

I. Introducción

El comercio asociado a las drogas ilegales afecta todas las fronteras colombianas. Por ellas salen las exportaciones ilegales y entran insumos químicos para la industria ilegal, armas para las redes de protección a la industria y el dinero en efectivo y los bienes utilizados en los procesos de lavado de activos ilícitos. La naturaleza de la industria ilegal frecuentemente requiere el uso de la fuerza, por lo que la violencia y el narcotráfico están siempre asociados. Por las fronteras también pasan traficantes y grupos armados en busca de protección en países vecinos.² Por todas estas razones la industria de drogas ilegales ha afectado y afecta las zonas fronterizas y las relaciones entre Colombia y sus países vecinos. Este problema es tal que las drogas ilegales desde hace años han sido consideradas en Colombia un asunto de seguridad nacional.

¹ Este informe presenta los resultados de una investigación exploratoria que el Centro Observatorio de Drogas y Delito (CEODD) de la Universidad del Rosario, dirigido por el economista Francisco Thoumi, realizó entre el 18 de agosto y el 18 de noviembre de 2005, a cargo del sociólogo Alejandro Reyes Posada y la politóloga Liliana Duica Amaya, en convenio con la Dirección Nacional de Estupefacientes. El economista Julián Parada prestó su colaboración en la revisión del documento original.

² “Colombia comparte 6.004 kilómetros de frontera con cinco países --Panamá, Venezuela, Ecuador, Perú y Brasil--, pero tradicionalmente ha prestado poca atención incluso a los sectores más afectados por el conflicto, que son los que colindan con Venezuela y Ecuador. El ingreso per cápita en los doce departamentos de frontera es un 23 por ciento inferior al promedio nacional. La extrema pobreza y la ausencia de instituciones estatales han dejado a las poblaciones vulnerables a merced de las actividades ilícitas, que inevitablemente se desbordan y afectan los territorios vecinos.” En **Las fronteras de Colombia: el eslabón débil de la política de seguridad de Uribe**, Internacional Crisis Group –ICG-, Informe sobre América Latina No. 9, 23 de septiembre de 2004, Quito-Bruselas.

Cuando la droga se exporta por las fronteras terrestres, el narcotráfico afecta las relaciones políticas, sociales y económicas que existen con los países vecinos. Las zonas fronterizas son también regiones que concentran las actividades de las fuerzas de la ley en su lucha contra el narcotráfico. Así, en 2004, cerca del 52% de las incautaciones de drogas ocurrió en puertos marítimos o en embarcaciones en altamar, en ruta hacia los destinos finales en Estados Unidos y la Unión Europea, como lo afirma un estudio de Naciones Unidas.³

El tráfico de cocaína, especialmente, afecta toda la cuenca amazónica e involucra territorios de Bolivia, Brasil, Perú, Ecuador, Venezuela y Colombia, en una compleja relación de áreas de cultivo y refinación y de rutas terrestres, fluviales y aéreas, con diferentes impactos sobre las economías locales y la inversión regional de capitales.

El propósito de este estudio es presentar una visión de conjunto sobre los problemas sociales asociados con el tráfico de drogas ilegales por las fronteras terrestres del país. Se espera que este esfuerzo mejore el conocimiento sobre el tema y al contribuir a la comprensión de las repercusiones generadas por la industria ilegal, permita mejorar la formulación e implementación de políticas.

II. Metodología

La metodología consistió en visitas de campo a un conjunto seleccionado de ciudades fronterizas y entrevistas formales con personas que por su posición tuvieran conocimiento sobre los temas estudiados. Casi todas las entrevistas se enfocaron en cinco problemas centrales, sobre los cuales se estructura el informe: 1) la organización de la industria del narcotráfico, con sus áreas de producción,

³ Resultados *Incautaciones de cocaína en las rutas del Pacífico y Atlántico, 2002 – 2004*. Armada Nacional, División Inteligencia (62% en 2002, 62% en 2002 y 52% en 2004). En Organización de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD), *Colombia Monitoreo de Cultivos de Coca*. Junio 2005.

procesamiento, rutas y flujos de inversión; 2) el impacto del narcotráfico sobre la población regional, especialmente los grupos vulnerables como los indígenas y campesinos; 3) la participación de los grupos armados, guerrillas y autodefensas, en el control de los territorios del negocio del narcotráfico; 4) la estrategia y las dificultades del control del narcotráfico por las autoridades del Estado; y 5) las relaciones de cooperación con las autoridades fronterizas de los países vecinos.

En cada entrevista se intentó tratar todos los temas anteriores aunque con frecuencia esto no fue posible pues los entrevistados expresaron o demostraron no tener conocimiento sobre algunos de los aspectos tratados. Esto es esperado en estudios de este tipo, porque tanto el tema como los entornos en los que se opera presentan problemas peculiares que dificultan el trabajo de investigación científica en ciencias sociales.

En las entrevistas se advirtió que se trataba de un estudio de la Universidad del Rosario para la Dirección Nacional de Estupefacientes y que las opiniones expresadas se tratarían de manera anónima y no comprometían a las personas entrevistadas ni a las instituciones a las que estuvieran afiliadas. (Se realizaron 37 entrevistas).

El equipo realizó un recorrido por Riohacha, Cúcuta, Puerto Carreño, Leticia, Puerto Asís e Ipiales y entrevistó autoridades políticas, militares, policiales y judiciales, para recopilar el conocimiento regional del problema. Arauca no pudo ser visitada porque ocurrió un paro armado de las FARC durante el período programado para la visita, lo que aumentó el riesgo para los investigadores a un nivel no aceptable por la Universidad del Rosario. Tampoco se visitó a la Ciudad de Panamá porque el presupuesto excluyó viajes a las capitales de países vecinos.

Dada la naturaleza del tema investigado, la información recolectada tiende a ser cualitativa y basada en entrevistas. Para obviar las deficiencias de este método, la

información obtenida en una entrevista se verificó con la obtenida en otras entrevistas con personas no allegadas entre sí. En algunos casos la información proporcionada por una persona se aceptó cuando estaba en concordancia con otras fuentes, como los periódicos locales.

Idealmente se quisiera tener una metodología que produjera resultados más robustos científicamente. Sin embargo, el método utilizado es posiblemente el más adecuado dadas las restricciones del trabajo. Por eso, este ensayo debe considerarse como un cuadro impresionista, que al verlo a distancia se tiene una idea muy clara de lo que representa, aunque de muy cerca no es una fotografía exacta.

III. Una tipología esquemática de las zonas fronterizas.

Las repercusiones de la producción y tráfico de drogas ilegales en cualquier región dependen de la estructura productiva que se tenga, de las instituciones y de la cultura prevaleciente. Dada la diversidad que existe entre las zonas fronterizas del país, es útil hacer una pequeña tipología que resalte algunos de los aspectos más importantes que condicionan las repercusiones mencionadas.

La mayor parte de las exportaciones que pasa por las fronteras en las zonas de Cúcuta e Ipiales proviene de otras partes del país y la mayor parte de las importaciones proviene de zonas distantes. En estas fronteras hay contrabando, pero la mayor parte del comercio es legal. En efecto, una parte significativa del comercio internacional legal, especialmente el comercio intra-regional dentro de la Comunidad Andina de Naciones, pasa por estas fronteras. Sin embargo, en ambas zonas la frontera ha sido desde siempre una barrera al comercio y el tráfico de personas en zonas económicamente muy integradas. En otras palabras, tanto Ipiales como Cúcuta están insertadas en regiones culturales, sociales y

económicas integradas que han sido divididas por la frontera. En este sentido, la frontera tiende a desintegrar una región ya fuertemente integrada. En efecto, trabajadores de un lado de la frontera trabajan en el otro y muchos productos regionales se consumen en ambos lados de la frontera. Ciudadanos de un lado de la frontera tienen amigos y parientes en el otro lado.⁴

La frontera de Colombia con Venezuela en la zona de Maicao en la Guajira es totalmente distinta. Esta zona y la ciudad de Maicao se desarrollaron dependiendo del contrabando, que ha existido desde tiempo inmemorial. Esta zona, además, tiene grupos tribales importantes cuya lealtad pertenece claramente a su grupo y no al resto de la sociedad, con la cual no tienen intención o deseo de asimilarse. De hecho, los Wayuu han contrabandeado desde principios de la Colonia. Para ellos el contrabando es una actividad económica normal que no tiene reproche en sí misma.

Maicao se desarrolló en la posguerra en respuesta a las políticas proteccionistas y a los aranceles fiscalistas que encarecían sustancialmente el comercio legal. El contrabando de Maicao y la Guajira siempre ha estado integrado a los mercados urbanos grandes del país, a los cuales ha provisto. En esta ciudad hay hoy otra “tribu” importante: palestinos y libaneses musulmanes de reciente inmigración (30 años o menos) con lealtades muy fuertes a sus tierras de origen y de difícil asimilación dentro de la sociedad colombiana. Para ellos, el contrabando también es una actividad moralmente aceptada. Debido a la estructura social de esta zona, no es sorprendente que en ocasiones haya habido marchas y protestas en defensa del “derecho adquirido al contrabando”.

Las otras zonas fronterizas son muy distantes del núcleo económico del país y están muy débilmente vinculadas con él. En ellas la presencia estatal ha sido débil, existe un sentimiento de abandono del estado central y el comercio de

⁴ Es notable que hasta el equipo de fútbol profesional de Cúcuta juega algunos partidos del campeonato colombiano en San Cristóbal.

bienes legales tiene bastantes productos locales. Los costos de transporte desde estas zonas a los mercados urbanos colombianos son enormes, lo cual hace que en ellas el desarrollo que se puede obtener dentro del sector legal tiende a ser de economías de subsistencia con niveles de ingreso muy bajos. Irónicamente, estas zonas son muy adecuadas para el desarrollo de cultivos y otras actividades ilegales. Infortunadamente, la lejanía de los mercados y el aislamiento del resto del país hacen que estas regiones sean rentables para actividades ilegales como el cultivo de coca, la manufactura de cocaína y el narcotráfico. Estos mismos factores facilitan el desarrollo de organizaciones armadas para-estatales de izquierda y derecha. En otras palabras, son zonas en las que las actividades económicas ilegales pueden florecer fácilmente, mientras que las legales son muy poco rentables, excepto algunas explotaciones de recursos naturales como el petróleo.

Algunos cambios incorporados en la Constitución de 1991 también han facilitado el desarrollo de economías ilegales en algunas zonas fronterizas. En los municipios distantes, con poca presencia del estado central y una carencia absoluta de sistemas que obliguen a los gobiernos locales a rendir cuentas al pueblo (“accountability”), las transferencias y regalías del gobierno central a los gobiernos municipales han convertido sus ingresos en botines objetos de captura por los grupos armados ilegales. Las zonas fronterizas en la mitad oriental del país y en el Putumayo son muy vulnerables al respecto.

Una característica importante de la mayoría de las zonas fronterizas colombianas es la débil presencia de las fuerzas policiales y militares comparada con la presencia de los representantes de países vecinos. Por ejemplo, en las fronteras de la orinoquia y amazonía la presencia de las fuerzas armadas venezolanas y brasileñas ha sido mucho más fuerte que la de las colombianas. Esos países han tenido una política de fronteras definida, mientras que Colombia no la ha tenido. En efecto, la política exterior colombiana se ha caracterizado mucho más por hacer grandes esfuerzos para hacer respetar tratados internacionales que por

ejercer físicamente la soberanía en las fronteras. En otras palabras, se ha apelado mucho más a acuerdos y fortalezas jurídicas para proteger la integridad física del país, que a ejercer de facto la soberanía en las zonas fronterizas. Esta política ha sido consistente con la poca rentabilidad de esas zonas para la economía formal colombiana, puesto que un ejercicio efectivo de la soberanía en esas regiones requiere dedicar recursos escasos, cuya rentabilidad en otras regiones es mucho más alta.

IV. El narcotráfico en las fronteras terrestres con Venezuela, Brasil, Perú y Ecuador

1.1. Frontera con Venezuela

La frontera colombiana con Venezuela es una de las principales rutas terrestres y fluviales para el narcotráfico, tanto para exportación de drogas como para importación de insumos químicos. Es una frontera extensa (2.219 Km), con una gran población binacional, que se mueve con facilidad en los dos países, con un comercio activo de mercancías y gasolina de contrabando, y con vigilancia policial insuficiente. La organización de empresas narcotraficantes formadas por redes de colombianos y venezolanos ha permitido aprovechar la experiencia acumulada en Colombia para convertir a Venezuela en exportador de drogas ilegales de primer orden hacia Europa y los Estados Unidos. Por Maiquetía, aeropuerto de Caracas, sale heroína hacia Estados Unidos y cocaína hacia España, Holanda, Inglaterra y Alemania, en la modalidad de “pasantes de droga” (“mulas”) y ocultos en exportaciones y contenedores.

Tráfico de drogas a Venezuela



Fuente: Policía Nacional de Colombia, I Encuentro Regional de Directores de los Cuerpos Policiales, presentación en Power Point. 2005

Según la Organización de Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito, UNODD, las mayores concentraciones de cultivos ilícitos en los departamentos fronterizos en el 2004 fueron Nariño (14.154 has), Vichada (4.692 has), Putumayo (4.386), Norte de Santander (3.055 has), Arauca (1.552 has), Vaupés (1.084), Amazonas (783), Guainía (723) y Guajira (556).⁵ En cuanto a laboratorios, según las cifras de destrucción de los mismos dadas por el Observatorio de la DNE, Nariño ocupa el primer lugar con 508 laboratorios destruidos, le sigue, dentro de los departamentos fronterizos, Putumayo con 82 laboratorios de base y 3 de cristalización, Arauca con 40 de base y uno de cristalización, Amazonas con 39 y 1, Norte de Santander con 27 y 3, Vichada con 25 y 1, La Guajira con 10 y 4 y Vaupés con 1 de cristalización.⁶

⁵ UNODD y Gobierno de Colombia *Monitoreo de Cultivos de Coca* Junio 2005. Págs. 10 - 15

⁶ *Ibíd.*, 70 y 71

Las principales rutas de narcotráfico terrestres son las de la Alta Guajira-Venezuela; La Gabarra-Cúcuta-San Antonio; Santander-Cúcuta-La Fría; Bogotá-Cúcuta-San Cristóbal; Tame-Guadualito (Venezuela). Las principales rutas fluviales son los ríos Catatumbo, Arauca, Meta, Vichada, Inírida y Guaviare. Por vía aérea se usan numerosas pistas en la Alta Guajira y los llanos Orientales.

La industria del narcotráfico importa de Venezuela insumos derivados de su industria petroquímica como gasolina, disolvente alifático, kerosén y ACPM, así como cemento. Igualmente canaliza importaciones de permanganato de potasio, metiletilcetona y anhídrido acético que se realizan para las industrias legales desde Europa y Estados Unidos.⁷

La frontera, además, ha sido escenario muy activo del conflicto armado durante dos décadas y media. Desde el descubrimiento de los yacimientos petroleros de Caño Limón y Cusiana a comienzos de los años ochenta, las guerrillas han controlado territorios y han extorsionado a las empresas petroleras, han “ordeñado” los oleoductos y gasoductos, se han beneficiado de los gastos en su reparación y se han insertado en el narcotráfico. Los grupos paramilitares que desde finales de los años ochenta protegían negocios del narcotráfico y de las esmeraldas, en la segunda mitad de los noventa empezaron a copar los territorios guerrilleros en el Catatumbo, Arauca y Vichada y a disputar una participación en el narcotráfico.⁸

⁷ “En aquellos departamentos fronterizos en los que se concentran las mayores áreas de cultivos de coca, se ha realizado la mayor cantidad de incautaciones de sustancias químicas. Estas sustancias entran al país bajo la modalidad de contrabando técnico, contrabando abierto y desviación de importaciones hechas por la industria legal, aunque ésta última cantidad es pequeña dados los fuertes controles administrativos y policivos a los cuales están sujetas las industrias lícitas y la ausencia de vías de comunicación con las ciudades industriales del país. Venezuela es el sexto país proveedor lícito de sustancias químicas controladas a Colombia con el 7,93% del total de sustancias importadas”. Observatorio de Drogas de Colombia. *Acciones y Resultados 2003*. Sección 4.3. “Tráfico y control de sustancias químicas en Colombia” Ministerio del Interior y de Justicia 2004. p. 131

⁸ “Otras regiones descuidadas de las fronteras que se sabe son lugares de ingreso de armas y puntos de exportación de drogas son las selvas orientales en los departamentos de Guainía, Vichada y Vaupés, al otro lado de la provincia amazónica de Venezuela. Allí los guerrilleros de las FARC han permanecido tranquilos durante muchos años, cultivando coca y transportándola por el río Guaviare o por avión hasta Venezuela y Brasil. El principal municipio en esta frontera, Puerto

Este enfrentamiento ha tenido efectos sociales importantes en cuanto ha generado desplazamientos y muertes de campesinos. Durante los últimos 10 años la mayor parte de las muertes generadas por el enfrentamiento entre paramilitares y guerrilleros han sido de civiles. Los grupos armados se han enfrentado directamente en pocas ocasiones. Ambos grupos han buscado socavar las redes de apoyo de sus contrincantes y han aterrorizado al campesinado, al que acusan de apoyar a sus opositores. Así, la mayoría de las víctimas han sido campesinos atrapados entre el enfrentamiento de grupos armados.

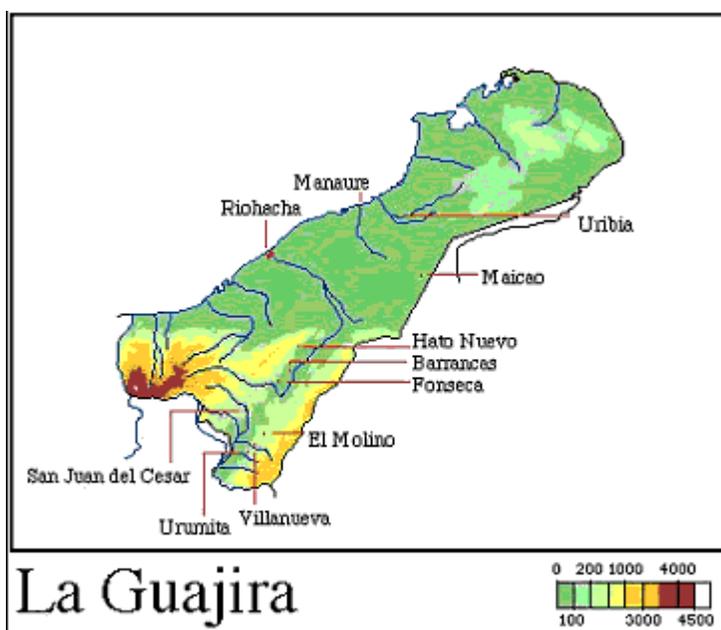
Si la migración tradicional de colombianos hacia Venezuela obedecía a la búsqueda de trabajo e ingresos, la más reciente proviene principalmente del desplazamiento forzado que los grupos armados provocan desde las Serranía de Perijá y el valle del Catatumbo hacia los Estados de Táchira, Apure y Zulia, así como desde el Sarare y la colonización de las riberas del Meta. El gobierno venezolano ha repatriado en algunas ocasiones a grupos de desplazados y en muchas otras les ha ofrecido asistencia humanitaria, mientras se restablecen las condiciones de seguridad para el retorno. En cuanto a los emigrantes laborales, desde el segundo semestre de 2004 el gobierno venezolano inició la nacionalización de cerca de 200.000 colombianos residentes en ese país, que mantienen la ciudadanía colombiana, conservan lazos familiares con Colombia y viajan con frecuencia entre los dos países. Es interesante notar que los cambios políticos ocurridos en Venezuela desde que Hugo Chávez asumió la presidencia han generado una migración en sentido inverso: empresarios y profesionales

Carreño, tan sólo tiene 18.000 habitantes, mientras que del lado venezolano Puerto Ayacucho tiene una población cercana a los 150.000, una brigada militar y 4.000 soldados bien armados. La presencia militar colombiana es escasa: dos batallones de río encargados de patrullar unos 1.500 kilómetros de vías fluviales. El verdadero corazón de las FARC se encuentra río arriba, en el departamento de Guainía y más cerca de Meta y Guaviare, en donde se cultiva una buena parte de la coca colombiana.” En **Las fronteras de Colombia: el eslabón débil de la política de seguridad de Uribe**, Internacional Crisis Group –ICG-, Informe sobre América Latina No. 9, 23 de septiembre de 2004, Quito-Bruselas.

venezolanos descontentos con su gobierno revolucionario han migrado hacia Antioquia, Atlántico y los Santanderes.

La frontera colombiana con Venezuela incluye tres grandes regiones naturales, que presentan problemas distintos: la península desértica de la Guajira; la región andina, en Cesar y Norte de Santander, que comprende las sub-regiones de la Serranía de Perijá, de La Gabarra, en el valle del río Catatumbo, y la de Cúcuta-Puerto Santander-Tibú; finalmente, la región de los Llanos del Orinoco, que incluye los departamentos de Arauca, frontera con el Estado de Apure, y Vichada y Guainía, con los estados de Bolívar y Amazonas.

1.1.1. La Guajira



Fuente: IGAC

En: http://www.dnp.gov.co/paginas_detalle.aspx?idp=107

Departamento Nacional de Planeación (2003) “*Información Básica Departamental, Guajira*”, DNP, República de Colombia, Abril de 2003.

El departamento tiene dos grandes regiones naturales, la Sierra Nevada de Santa Marta, que comparte con Cesar y Magdalena, y la planicie desértica de la

península de La Guajira, que al norte se abre al mar Caribe y al este colinda con Venezuela. Con una extensión de 20.848 km² y una población estimada para 2005 de 526.148 habitantes, tiene una baja densidad demográfica y un alto índice de necesidades básicas insatisfechas (64% en 1993), que lo sitúan entre los departamentos más pobres del país.

La primera experiencia de La Guajira con el narcotráfico fue la siembra de marihuana en la Sierra Nevada de Santa Marta (SNSM) en los años 70, que produjo una bonanza que irrigó nuevos ingresos, generó sustanciales aumentos en los precios en los bienes y servicios difíciles de importar a la región y vinculó algunos clanes de familias tradicionales de la Guajira y transportadores indígenas. Esta Bonanza también generó inversiones sustanciales en finca raíz urbana en Santa Marta y Barranquilla

La planicie desértica de la Guajira, donde hay trochas, pistas aéreas y puertos naturales para el tráfico de drogas al exterior, es el territorio del pueblo Wayuu. Los Wayuu son 137.112 indígenas, que habitan la media y alta Guajira, que comprende a Riohacha, Uribia, Manaure y Maicao. Su territorio está amparado legalmente por los resguardos y las trochas dividen las áreas de cada clan familiar. Su lengua protege la comunicación inter-étnica y excluye a los extraños, así como su sistema de justicia mantiene su cohesión social y resuelve disputas mediante la negociación de compensaciones.⁹

Por su posición geográfica en la puerta de entrada desde Venezuela y las Antillas, los Wayuu, pescadores y navegantes, desde hace mucho tiempo han participado en el contrabando de mercancías hacia Colombia, controlado por los comerciantes

⁹ “En el departamento de La Guajira habitan cuatro etnias, con una población estimada de 161.902 personas (20,6% de la población indígena nacional que asciende a 785.356). La etnia predominante es la Wayuu con 137.112 indígenas (17,5% del total nacional y 84,7% del departamental), distribuidos en 23 clanes matrilineales, en una extensión de 1.080.336 hectáreas localizadas en su mayoría en el resguardo de la Alta y Media Guajira. Las otras etnias son Koguis (9.911), Arzarios (80) y Arhuacos (14.799), localizados en las estribaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta”. Departamento Nacional de Planeación “Información Básica Departamental, Guajira”, DNP, República de Colombia, Abril 2003. Disponible en http://www.dnp.gov.co/paginas_detalle.aspx?idp=107

de Maicao.¹⁰ Para ellos el contrabando ha sido una ocupación económica ilegal pero legítima. Los ingresos de esta actividad son indispensables para el sostenimiento de la comunidad si se considera la escasez de recursos vitales de su territorio, que los obliga a importar hasta el agua potable para subsistir. En efecto, los Wayuu no podrían sobrevivir en esa región sin los ingresos ilegales del contrabando. Con la globalización y la apertura, el contrabando de artículos de producción legal bajó dramáticamente su rentabilidad y se redujo su escala de negocios, aumentando su dependencia de fuentes alternas de ilegalidad, como el narcotráfico. Ahora se han ocupado también en transportar, encaletar y despachar la droga por las trochas y los puertos naturales, subordinados al control de los paramilitares¹¹.

El negocio del narcotráfico empieza por la Sierra Nevada de Santa Marta donde hay cultivos y pequeños laboratorios de producción de base de coca en fincas, controlados por la guerrilla del Frente 59 de las FARC en las partes altas y por paramilitares en las estribaciones. Según afirman las autoridades de policía, los laboratorios de cristalización de cocaína son manejados por los paramilitares de Hernán Giraldo, ahora bajo el mando de Rodrigo Tovar, alias Jorge 40, jefe del Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). En esta región no se presentan confrontaciones directas entre guerrillas y paramilitares, sino una clara distribución del territorio, con sanciones ejemplarizantes contra la población civil que vive entre las dos fuerzas. Sin embargo, los paramilitares tratan de impedir que suban alimentos a la Sierra, para lograr desabastecer a las guerrillas¹².

Actualmente hay cultivos de coca en las estribaciones de la SNSM en Palomino, Riohacha y Mingueo. También en el municipio de Dibuyá, segregado de Riohacha,

¹⁰ Apartes de la entrevista con el Secretario de Gobierno de la Alcaldía de Riohacha, Guajira. Septiembre 1 de 2005

¹¹ Para analizar el poder paramilitar en las tradicionales zonas de cultivo de Colombia, véase Ricardo Vargas Meza *Narcotráfico, Guerra y Política Antidrogas. Una perspectiva sobre las drogas en el conflicto armado colombiano*. Acción Andina 2005.

¹² Entrevista Secretario de Gobierno Riohacha *Op cit*.

se ha comenzado a cultivar coca, hasta la zona de Pénjamo.¹³ Puerto López y Puerto Estrella, Diluyá y Camarones son puertos usados para enviar droga y recibir armas para los paramilitares. Los destinos de la coca que sale por mar de la Guajira son Haití, República Dominicana, Antillas Holandesas y Jamaica, y de allí se reembarca a Europa y los Estados Unidos.

En la Sierra de Perijá el Frente 59 de las FARC controla los cultivos de coca y amapola. Jorge 40 copó militarmente la región de Perijá y desplazó a la guerrilla hacia la parte alta de la sierra. Se reporta el traslado de cultivos de amapola al lado venezolano de la Sierra de Perijá, donde hay presencia de las FARC, cuando se desplaza para evadir a la fuerza pública colombiana¹⁴.

Desde la destrucción de los grandes carteles del narcotráfico a principios y mediados de la década de los noventa, la fragmentación de las empresas exportadoras de drogas cambió la estructura del negocio a favor de quienes ejercen control armado de los territorios. La destrucción de los carteles llevó a la proliferación de pequeños “cartelitos”, que han seguido una estrategia de bajo perfil para evitar ser detectados. Estas organizaciones no tienen la capacidad de financiar grandes grupos armados y prefieren subcontratar los servicios de protección y ajuste de cuentas requeridos en el negocio ilegal. Los traficantes subcontrataron con las organizaciones armadas ilegales las que han tenido vía libre para controlar territorios de cultivos en los que fijan precios y negocian condiciones favorables en la compra de coca, manufactura y venta de cocaína.¹⁵ En efecto, los grupos armados ilegales tienen ahora una posición monopsonista, por ser únicos compradores de coca y pasta de coca y una monopolista al ser únicos vendedores de cocaína en los territorios controlados. Por eso en la Guajira no existen carteles y se habla de una “organización plana”, donde ningún

¹³ El censo de cultivos de coca de las Naciones Unidas para el año 2004 muestra que La Guajira pasó de tener un área de 321 has. cultivadas con coca en Agosto de 2000 a 556 has. en el 2004. Naciones Unidas UNODC, 2005. *Op cit.*, p 15. Ver Tabla 1.

¹⁴ Apartes de la entrevista a un oficial de la SIJIN Riohacha, Guajira. Agosto 31 de 2005.

¹⁵ Vargas Meza op.cit.

traficante quiere ser líder. Allí hay presencia de narcotraficantes del Valle y de Bogotá, que son quienes reciben y despachan la mercancía y son conocidos como “pasantes” o “caleteros”¹⁶.

Maicao ha tenido y tiene un comercio activo con Panamá y Venezuela. En Maicao, Uribe y Manaure se creó una zona especial aduanera que permite ingresar mercancías con un IVA de solo 6%. Así la mercancía se legaliza y se reexporta a Venezuela. El narcotráfico aprovecha a Maicao como escala en el proceso de lavado de dólares por medio de la importación de mercancías. En los últimos años el comercio de Maicao ha estado decayendo por la apertura de importaciones, la reevaluación del peso y el aumento de controles de la DIAN.

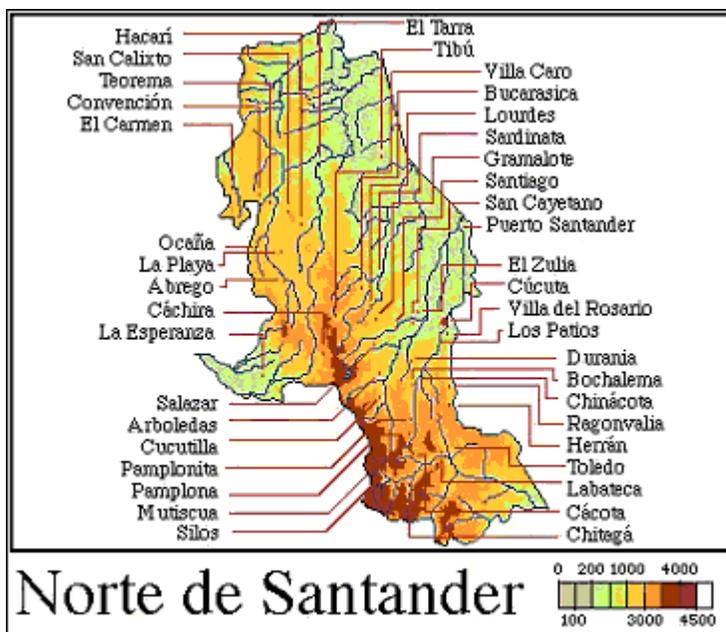
Últimamente el uso de carreteras para el narcotráfico ha bajado su actividad por las interceptaciones de marihuana y cocaína efectuadas por la policía. Antes se enviaba encomiendas de drogas en buses intermunicipales, a cargo del conductor, y ahora esa modalidad se está controlando. Según fuentes policiales, la red de informantes funciona bastante bien, lo que ha permitido aumentar las incautaciones.

El narcotráfico ha traído consigo un aumento de la violencia asociada a los ajustes de cuentas. Esta amenaza garantiza el cumplimiento de los acuerdos y la disputa por la delimitación de territorios entre guerrillas y paramilitares. Según la policía nacional, en 2004 hubo cerca de 200 homicidios en Riohacha y 2.700 familias o sea cerca de 12.600 personas desplazadas. Entre 1997 y 2000 los homicidios en el departamento subieron de 221 a 333, los actos de piratería terrestre de 31 a 160 y las lesiones personales de 104 a 254¹⁷.

1.1.2. Norte de Santander

¹⁶ *Ibíd*

¹⁷ Policía Nacional, *Revista de Criminalidad*, 2001.



Fuente:IGAC

En: http://www.dnp.gov.co/paginas_detalle.aspx?idp=111

Departamento Nacional de Planeación (2002) “Información Básica Departamental, Norte de Santander”, DNP, República de Colombia, Agosto de 2002.

Los 21.658 km² de Norte de Santander albergan una población estimada de 1'494.219 habitantes en 2005, en 40 municipios. Su población indígena, de la etnia Motilón-Barí, ha quedado reducida a 3.617 personas, que viven en dos resguardos.

La nacionalización de colombianos en Venezuela ha aumentado la población con doble nacionalidad que se mueve entre los dos países, integra las economías legales e ilegales y facilita el contrabando y el narcotráfico. Esta zona ha presenciado flujos de población en ambos sentidos, reflejo de las diferentes tendencias de los gobiernos de los dos países. Así, personas enriquecidas en el narcotráfico en Colombia buscan establecerse en Venezuela para invertir y lograr refugio de la persecución de las autoridades colombianas. En sentido inverso, empresarios y profesionales venezolanos han comenzado a migrar a Colombia para evitar medidas del actual gobierno del presidente Hugo Chávez.

La Serranía de Perijá y el valle del Catatumbo han sido, durante más de dos décadas, territorio de las guerrillas de las FARC, el ELN y el EPL.¹⁸ La región del Perijá permite acceso fácil al valle del Cesar y al Magdalena Medio. La región del Catatumbo, fronteriza con Venezuela, ha tenido una colonización de cuatro décadas, en cuya historia se enlazan las guerrillas como formas alternas de autoridad. Comunica al Magdalena Medio por Ocaña, remontando la cordillera Oriental. El oleoducto Caño Limón – Coveñas, que pasa por Tibú, atraviesa la región de sur a norte y ha sido objeto de múltiples atentados dinamiteros por las guerrillas.

En la región de La Gabarra¹⁹ se encuentra el territorio del Frente 33 de las FARC, al mando de Rubén Zamora, que controla los cultivos y laboratorios de coca y la venta a las empresas narcotraficantes que la exportan por Venezuela.²⁰ El EPL, que se desmovilizó en 1991, conservó un reducto de unos 150 hombres en la región de El Tarra y San Calixto, y están dedicados al narcotráfico. En Puerto Santander, al oriente de Cúcuta, un grupo paramilitar controla los laboratorios de cristalización de cocaína y vende su producto a los narcotraficantes²¹.

¹⁸ “Más hacia el norte, a lo largo de la frontera con Venezuela, las plantaciones ilícitas de coca y amapola en la Serranía de Perijá (Cesar) han sido una fuente de tensión permanente. Desde los años ochenta, esta zona ha sido testigo de operaciones antinarcóticas venezolanas contra cultivadores de coca y amapola colombianos, denominados “narcocampesinos”, que viven del lado venezolano de la Serranía de Perijá.103 Es una de las pocas regiones en donde se sabe que existen cultivos ilegales en ese país (se calcula que hay tan sólo entre 400 y 600 hectáreas). “En **Las fronteras de Colombia: el eslabón débil de la política de seguridad de Uribe**, Internacional Crisis Group –ICG-, Informe sobre América Latina No. 9, 23 de septiembre de 2004, Quito-Bruselas.

¹⁹ “Los beneficios estratégicos que ofrecen las fronteras son bastante obvios. En lo que respecta a los cultivos de coca en y cerca de La Gabarra (Norte de Santander), el Lago de Maracaibo, del otro lado de la frontera en Venezuela, es accesible por lancha rápida desde los numerosos ríos tributarios que desembocan en el lago, o por carretera del lado venezolano”, En **Las fronteras de Colombia: el eslabón débil de la política de seguridad de Uribe**, Internacional Crisis Group – ICG-, Informe sobre América Latina No. 9, 23 de septiembre de 2004, Quito-Bruselas.

²⁰ El área destinada al cultivo de coca para Norte de Santander pasó de 6.280 has. en 2000 a 9.145 has. en 2001, 8.041 has. en 2002, 4.471 en 2003 y en Diciembre de 2004 a 3.055 has. Naciones Unidas UNODC 2005. *Op cit* p. 15.

²¹ Los datos y cifras son apartes de la entrevista a un oficial de la SIJIN Cúcuta, Norte de Santander. Agosto 22 de 2005.

El control territorial que buscan las guerrillas y los paramilitares tiene como propósito básico asegurar su participación en la producción de drogas, para negociarla con las empresas narcotraficantes de la región. Las autoridades regionales no perciben que exista un conflicto por dominio territorial, sino una clara división de áreas de operación. Al establecerse en una región, los paramilitares demarcan el territorio con algunos asesinatos, cuyas víctimas son escogidas arbitrariamente, acusándolas de subversivos, y con ello, al imponer el terror, obligan a los campesinos a cultivar coca y aportarles al negocio.²²

Algunos grandes capos del narcotráfico han venido a negociar las comandancias de grupos paramilitares, como es el caso de Jorge 40, quien, según se afirma en la región, compró el mando de los paramilitares desmovilizados de Tibú y les cambió el nombre por las Águilas Negras, para sumarse a la negociación de San José de Ralito. Según la policía, en la región se rumora que Carlos Mario Jiménez, alias Macaco, del norte del Valle, uno de los jefes del Bloque Central Bolívar (BCB) de las AUC, está tratando de comprar un grupo paramilitar en Norte de Santander²³.

Estos indicios sugieren que la desmovilización de los paramilitares es, por una parte, una oportunidad para que grandes narcotraficantes asuman el papel de

²² La coincidencia territorial entre áreas con cultivos ilícitos y el Bloque Central Bolívar (BCB) de las AUC es señalada por la Fundación de Ideas para la Paz: "Por otra parte, el reciente Censo de Cultivos de Coca (junio de 2005) de la UNODD muestra cómo coinciden las zonas de fuerte presencia del BCB (Nariño, Putumayo, Caquetá, Arauca, Vichada, Santander, Norte de Santander y Caldas) con las zonas de cultivo y expansión de la coca. Por ejemplo, "en el departamento de Bolívar, el cultivo de coca está concentrado en el área conocida como Sur de Bolívar", lugar donde precisamente ejerce su influencia el BCB. Entre el mes de enero y la primera semana de diciembre de 2004, según los datos de la Revista Semana, los laboratorios destruidos y las incautaciones de coca registradas a lo largo del país guardan cierta relación con el accionar del BCB. Nariño, por ejemplo, presentó la tasa más alta de destrucción de laboratorios (39) y una de las más importantes en términos de incautaciones de coca (3.113 k.). En Putumayo fueron destruidos 13 laboratorios. En las demás zonas donde hace presencia el BCB fue común el hallazgo de laboratorios o la incautación de coca." En Fundación de Ideas para la Paz, "Siguiendo el conflicto: hechos y análisis de la semana", Número 25. Agosto 12 de 2005

²³ Entrevista SIJIN Cúcuta, Norte de Santander, *Ibid.* Afirmación sugerida también por Ricardo Vargas Meza, en su ponencia del panel "Costos y beneficios de la política colombiana", moderada por Álvaro Camacho, como parte del *Seminario Internacional Narcotráfico: Debate relegado, política agotada*. Fundación Agenda Colombia y Contraloría General de la República. Bogotá, Jueves 27 de Octubre de 2005.

combatientes políticos y reciban los beneficios legales por contribuir a la paz, pero también, por otra parte, revela que el vacío de seguridad que le sigue tiende a ser llenado con la reorganización de ejércitos privados al servicio de otros narcotraficantes interesados en ocupar las posiciones de los que abandonan el negocio por la puerta grande de la paz.²⁴

Los narcotraficantes colombianos han hecho grandes inversiones en el Estado Zulia y ya se observa un auge de nuevas mansiones y edificios en San Cristóbal y Maracaibo. También han comprado propiedades en Puerto Cabello, al oriente de Venezuela, de donde sale la droga por mar para Europa. El gobierno venezolano, alarmado por el auge de construcciones ostentosas, ha comenzado a indagar sobre el origen de los capitales que invierten los colombianos.

Según la información de la policía, los grupos de narcotraficantes conocidos en Norte de Santander son:

-Los Boyacos, que compran la cocaína al Frente 33 en La Gabarra; son dos organizaciones y una parece estar asociada con paramilitares, según un oficial de la SIJIN Cúcuta, estos grupos son la nueva élite de narcotraficantes.

-Los Pepes, que intercambian coca por armas con la guerrilla y los paras, ambos tienen nexos con el cartel del Norte del Valle.²⁵ El líder es un tal Jerson, con vínculos con el cartel de Cali;

²⁴ “En los últimos tres años, los paramilitares han extendido su influencia hasta los departamentos de frontera, como La Guajira, Cesar y Norte de Santander, que colindan con Venezuela. Se afirma que las AUC operan de lado y lado de la frontera colombo-venezolana⁴¹, aunque sin las antiguas bravuconadas que alguna vez dieron a entender que consideraban el régimen del presidente Chávez como un objetivo militar. También se dice que los poderosos carteles de la droga de Medellín que trabajan en asocio con las AUC han comprado extensos terrenos en las regiones fronterizas orientales de Venezuela, cerca del Lago de Maracaibo. Del lado colombiano de esa frontera no hay indicios de que haya disminuido el predominio de las AUC en los negocios de la protección y la cocaína. Desde Cúcuta, capital del departamento de Norte de Santander, hacia el norte a lo largo de la frontera, casi todas las actividades ilícitas están bajo su control.”, En **Las fronteras de Colombia: el eslabón débil de la política de seguridad de Uribe**, Internacional Crisis Group –ICG-, Informe sobre América Latina No. 9, 23 de septiembre de 2004, Quito-Bruselas.

²⁵ Es de notar que este grupo es diferente al conocido Los Pepes o perseguidos por Pablo Escobar que surgió hacia 1990.

-Los Pulpos, de Luis Enrique Pérez, formados por traquetos de los carteles de Cali y Medellín. Luis Enrique Pérez vive en el barrio San Luis, de Cúcuta;

-Los Paisas, que mueven negocios en Cúcuta, los Llanos Orientales y Nariño;

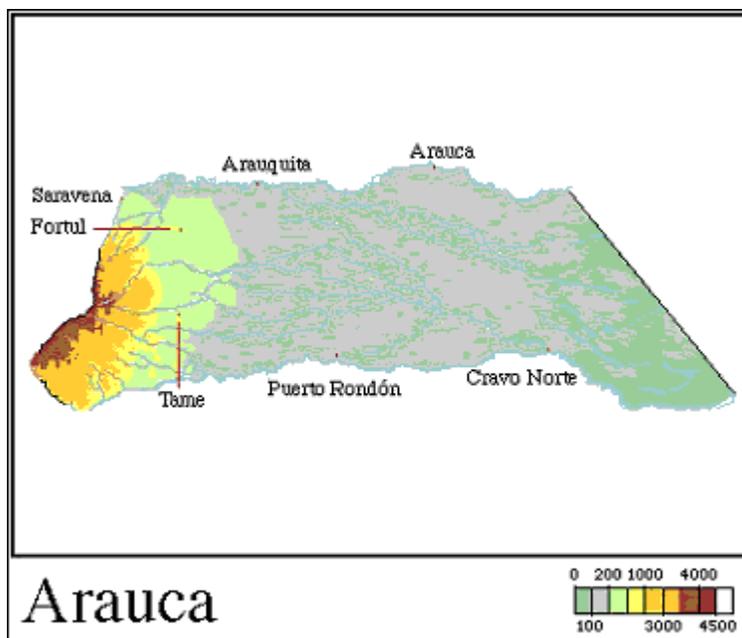
El control policial y judicial de estos grupos se dificulta porque tienen estructuras encubiertas de mando y delegación de funciones a empleados y testaferros, y sus operaciones están diseñadas para ocultar evidencias y pruebas. La policía afirma no contar con equipos y canales para escuchar conversaciones por teléfono celular ni para interceptar mensajes de correo electrónico, medios de comunicación usuales de los negocios del narcotráfico.

Los mandos de la policía consideran que existen, en general, buenas relaciones con la Guardia Nacional y la Policía Técnica Judicial (PTJ) venezolanas, con quienes hay buena fluidez de información. Existe la Comisión Binacional de Ministros de Relaciones Exteriores, para armonizar políticas de lucha contra el narcotráfico. Venezuela ha emprendido acciones de erradicación manual de cultivos ilícitos²⁶ y destrucción de laboratorios y en su territorio se han efectuado incautaciones de cocaína y de heroína²⁷. No obstante lo anterior, entre los entrevistados existe la opinión generalizada de que los rangos bajos de las autoridades venezolanas son fácilmente sobornables por los narcotraficantes para garantizar el tránsito de los envíos de drogas.

1.1.3. Arauca

²⁶ Una brigada antinarcóticos especial de la Guardia Nacional en Zulia inició operaciones en 1985 y desde entonces ha realizado campañas anuales de erradicación en la Serranía de Perijá. En 1996, la Guardia Nacional afirmó que en los anteriores veinte años había erradicado más de 60.000 hectáreas de cultivos ilícitos. Véase Andrés López Restrepo y Miguel Ángel Hernández Arvelo, "Colombia y Venezuela frente al narcotráfico", en Socorro Ramírez y José María Cadenas, eds., Colombia-Venezuela, agenda común para el siglo XXI (Tercer Mundo Editores), p. 268.

²⁷ Diario El Nacional jueves 10 de noviembre 2005.



Fuente:IGAC

En: http://www.dnp.gov.co/paginas_detalle.aspx?idp=92

Departamento Nacional de Planeación (2003) “*Información Básica Departamental, Arauca*”, DNP, República de Colombia, Julio 17 de 2003.

El departamento de Arauca tiene una superficie de 23.818 km² y limita por el norte con el río Arauca, que lo separa de Venezuela, por el este con Venezuela, por el sur con los ríos Meta y Casanare, que lo separan de los departamentos del Vichada y Casanare, y por el Oeste con el departamento de Boyacá. Arauca está ubicado en un punto estratégico en la frontera con Venezuela que colinda con el estado Apure a lo largo de 405 km de extensión. El departamento posee una de las más grandes reservas de petróleo y conecta el oleoducto más importante del país, Caño Limón – Coveñas.

Arauca ha vivido un serio conflicto político por la distribución de regalías petroleras desde mediados de los años ochenta. La ciudad de Arauca, la capital, representa políticamente la sociedad ganadera tradicional de los grandes hatos llaneros, y canalizó a su favor una gran parte de las regalías para gastos muchas veces

suntuarios para las condiciones locales.²⁸ La región del Sarare, en el piedemonte de la cordillera Oriental, donde reside la mayor parte de los colonos campesinos inmigrantes de Santander y Boyacá, sólo recibió beneficios marginales y no tuvo la representación adecuada en la administración regional y la Asamblea Departamental.²⁹

Este contexto permite entender la oportunidad política que representó para las guerrillas del ELN asumir la representación de las demandas e intereses de los colonos de Saravena y Tame, para presionar por la fuerza la realización de inversiones públicas en beneficio de la colonización. Esta práctica extorsiva de la guerrilla mereció el calificativo de “clientelismo armado” en los medios de comunicación. El ELN aprovechó también las cuantiosas inversiones petroleras para extorsionar a las compañías contratistas mediante atentados a la infraestructura de conducción, para obligarlas a entregar dinero e insumos para la guerrilla y a realizar obras para las comunidades. La guerrilla también controló los procesos de contratación de personal e influyó en la determinación de gastos públicos en la región.

La compenetración social del ELN, y posteriormente de las FARC, con la población campesina, ha vuelto extremadamente difícil la política de seguridad democrática del gobierno en el departamento de Arauca. Son tan extensas las redes de simpatizantes y cooperantes con las milicias y guerrillas, que éstas encuentran fácil refugio entre la población, con lo cual neutralizan los intentos de la fuerza pública. A su vez, en este contexto las medidas represivas tienen muchas posibilidades de afectar a civiles inocentes y violar los derechos humanos. Uno de los últimos informes de Amnistía Internacional “*Colombia. A Laboratory of War Repression and Violence in Arauca*”, critica estrategias como las zonas de rehabilitación y de consolidación y las detenciones masivas. La mayor parte de las

²⁸ Los ejemplos más notables son la construcción de la manga de coleo, el velódromo y la piscina con olas en Arauca.

²⁹ Véase la tesis inédita de Maestría en Historia de Andrés Peñate, *Oil and Politics in a Colombian Province*, Oxford, 1989.

ONGs que trabajan en programas sociales se oponen a las estrategias de seguridad aplicadas en Arauca y señalan la frecuente confusión entre combatientes y no combatientes por las autoridades estatales. Estas, a su turno, entienden estas protestas como una colaboración de las ONGs con el enemigo armado. Según personal de la Sijin y de la Fiscalía³⁰ hay entre 300 y 400 organizaciones de este tipo haciendo propaganda antiestatal.

La deslegitimación del Estado y la ausencia de una administración regional eficiente en Arauca han sido aprovechadas por los grupos armados para acrecentar su influencia regional. El ELN lleva más de tres décadas en la región, en un principio se reducía al abigeato y a la extorsión de los inversionistas, principalmente petroleros, pero desde finales de los ochenta, cuando el negocio de las drogas ilícitas empezó a cobrar importancia en el país, sus actividades se han extendido. Hoy en día el ELN actúa mediante el frente Domingo Laín Sáenz al mando de alias “Pablo” y tiene a su disposición las compañías Simacota y Capitán Pomares³¹ que se disputan el territorio con la guerrilla de las FARC, básicamente por áreas de cultivo o áreas de influencia y rutas. Según la Sijin de Arauca, el ELN podría estar manejando alrededor del 20% del negocio de las drogas ilícitas en el departamento.

Sin embargo, según los analistas militares, “las cuadrillas del ELN no son muy activas, son débiles, pero conservan un poder de daño, su fortaleza es el manejo político”³². Su mecanismo de persuasión es la amenaza y esto les ha servido para que sigan teniendo influencia en la región araucana y para que extiendan su presencia hacia suelo venezolano. En los círculos oficiales de Arauca es evidente la flexibilidad con la que oficiales venezolanos manejan la movilización de guerrilleros de un lado a otro de la frontera, y es evidente para ellos también la reticencia frente al paso de oficiales (Das, Sijin, fuerzas armadas y policía).

³⁰ Entrevista a la Fiscalía y a la Sijin que hacen parte de la Estructura de Apoyo de Arauca, Arauca. Entrevista realizada febrero 23 de 2006.

³¹ Observatorio Vicepresidencia *Op cit*

³² Presentación de la situación de seguridad en Arauca por parte de un oficial del ejército Brigada XVIII Arauca, Arauca. Febrero 23 de 2006.

La guerrilla de las FARC tiene una historia más reciente en el departamento. Se consolidaron con la toma de Fortul en 1980 por parte del Frente 10 “Guadalupe Salcedo”³³, hoy todavía vigente, comandado por Germán Suárez Briceño, alias “Grannoble”³⁴ uno de los cabecillas más importantes de esta organización, pedido en extradición por el gobierno de Estados Unidos como responsable del asesinato de tres misioneros estadounidenses. De este frente, alias “tuerto Camilo” y alias “Arcesio” son los que se encargan de rendirle cuentas al comandante por concepto de narcotráfico. Este frente maneja cultivos, producción y tráfico de droga con destino a Venezuela. Se encuentra también el Frente 45, con influencia principalmente en Fortul y TAME, que se encarga de cobrar gramaje y cuidar cultivos ilícitos y la columna móvil Alfonso Castellanos, que opera bajo una estrategia conocida como interfrentes ó minibloques, para repeler las acciones del ejército en una suerte de guerra irregular. Según estimaciones de la Sijin en Arauca, las FARC pueden estar manejando alrededor del 80% de la droga que se producen en el departamento.

Arauca presentó un alza de cultivos de coca en el departamento del 188% entre 2003 y 2004 al pasar de 539 hectáreas sembradas a 1.552³⁵. Sin embargo, si se mira en perspectiva desde el año 2000, cuando iniciaron los cultivos en este departamento, se podría decir que la política de erradicación ha obtenido algunos resultados. Según el informe de acciones y resultados del Observatorio de Drogas de Colombia,

“El cultivo de coca en Arauca fue detectado por primera vez en el año 2000 con cerca de 1.000 Ha. Aumentó a más de 2.000 Ha en 2001 y 2002. En 2003, (...) el cultivo de coca

³³ Observatorio de Derechos Humanos de la Vicepresidencia de la República de Colombia. “Algunos Indicadores sobre la situación de Derechos Humanos a Septiembre de 2004 en el Departamento de Arauca”. Disponible en

<http://www.derechoshumanos.gov.co/observatorio/indicadores/2004/indicadoresarauca.pdf>

³⁴ Entrevista Sijin Arauca. *Op cit.*

³⁵ Naciones Unidas UNODC *Op Cit.*, p.31.

disminuyó a 500 Ha en diciembre del mismo año. Sin embargo, aumentó nuevamente a casi 1.600 Ha en 2004 (...).³⁶

Adicionalmente los municipios con presencia de cultivos ilícitos -Saravena, Arauquita, Fortul y Tame- son los que tienen mayor presencia de grupos armados. Hay un punto fronterizo que ha sido uno de los más disputados por las diferentes fuerzas que han estado en Arauca y es la Isla del Charro, jurisdicción de Saravena, conocida también como “el triangulo dorado”, que en los meses de diciembre a marzo, cuando el nivel del río Arauca baja, se puede atravesar caminando y en ese periodo queda en territorio colombiano. En los restantes meses del año, cuando el nivel del río sube, la isla se convierte en terreno venezolano. Según las Sijin de Arauca, este terreno se encuentra en disputa, básicamente, por la facilidad de pasar drogas y armas entre Venezuela y Colombia. En este punto, tuvo lugar la operación “Sable dorado” del ejército donde se incautaron entre otros 10.280 galones de gasolina, 1.200 galones de ACPM, cemento y amoniaco³⁷.

Además del narcotráfico, las dos guerrillas han establecido mecanismos para conseguir rentas del petróleo desde comienzos de los años ochenta. El DNP afirma que

“son varias las formas que utiliza la guerrilla para apropiarse del producto de la renta petrolera. El secuestro, el boleteo y la extorsión de población civil y de funcionarios de empresas petroleras, la presión, secuestro y asesinato de funcionarios públicos para desviar recursos públicos y el sabotaje contra la infraestructura petrolera”.³⁸

El sabotaje a la infraestructura petrolera significó en el año 2001 (año en el que se perpetraron el mayor número de atentados que ascendieron a 179) pérdidas por

³⁶ Observatorio de Drogas de Colombia 2005. *Acciones y Resultados*. Ministerio del Interior y de Justicia y Dirección Nacional de Estupefacientes, Unidad Administrativa Especial. Bogotá, Colombia 2005. P. 65.

³⁷ Entrevista Sijin Arauca *Op Cit*. Véase también “Operaciones ofensivas en Arauca. Mueren dos terroristas de las FARC”. Ejército Nacional. Abril 25 de 2005. Disponible en: <http://www.ejercito.mil.co/index.php?idcategoria=77020>

³⁸ DNP “Información básica...” *Op Cit*.

un monto de 280.000 millones (US\$124.2 millones). Lo que significó para el departamento una participación por concepto de regalías de US\$33.9 millones en 2001, cuando en 2000 había sido de US\$63.6 millones³⁹.

Sin embargo, además de la disputa de estas dos guerrillas por el poder económico y territorial de la región, la lucha más importante es el control de masas. Las FARC tienen un poderío militar claro evidenciando con dos frentes y una columna móvil, mientras que el ELN, con un frente y dos cuadrillas, ejerce más un poder blando⁴⁰ que le ha servido para no dejarse eliminar de las FARC. Uno de los hechos más recientes en el departamento fue la retaliación de estos dos grupos, cuando el ELN asesinó a alias “Che Guevara” y luego las FARC, como venganza, asesinaron a alias la “Ñeca” del ELN, ambos importantes cabecillas de las respectivas organizaciones.

Por otro lado, los grupos de paramilitares en este departamento tuvieron una vida corta. Si bien no hay una fecha exacta de la incursión de estos grupos, el Observatorio de Derechos Humanos de la Vicepresidencia afirma que “en el 2001 las autodefensas incursionaron en Arauca desde Hato Corozal y Paz de Ariporo en Casanare, entrando por Tame y expandiéndose hacia Saravena, Fortul y Puerto Rondón principalmente, municipios en los que han ejercido una notable influencia”⁴¹.

Como se constató en Cúcuta, Norte de Santander, las autodefensas que operan a lo largo de los departamentos fronterizos con Venezuela han buscado expandir sus redes hacia el vecino país. El mecanismo por excelencia ha sido el amedrentamiento de la población civil a través de masacres con altos grados de sevicia, lo que en cierto momento les abrió espacio para disputar territorios con las FARC y el ELN. Sin embargo, a pesar que en algún momento los grupos de autodefensa fueron vistos como una posible solución para el departamento, en la

³⁹ Carta informativa de ECOPETROL 2002. www.ecopetrol.com.co

⁴⁰ *Soft power* ó poder blando evidenciado en la estrategia política no-militar del ELN con la que ha ganado adeptos en las organizaciones sociales de Arauca.

⁴¹ Observatorio de Derechos Humanos de la Vicepresidencia *Op cit.*

medida en que podrían dar fin a los grupos guerrilleros, hoy en día las autoridades del departamento dejan en claro que las autodefensas nunca fueron ni serán una solución en el país. En ese sentido, las cifras de la tasa departamental de homicidios constatan como a raíz de la llegada de los grupos paramilitares a la región, aumentó esta cifra respecto a años anteriores y también respecto a la tasa nacional.

**Tasa de Homicidios departamental y nacional 1998-2004
(por cien mil habitantes)**

Año	Tasa Nacional	Tasa Departamental
1998	57,22	94,78
1999	58,83	92,24
2000	62,96	77,02
2001	64,65	104,25
2002	65,11	153,12
2003	51,31	167,24
2004	45,95	146,08

Fuente: Policía Nacional.

Procesado: Observatorio del Programa Presidencial de DDHH y DIH, Vicepresidencia de la República⁴².

El grupo de autodefensas que se estableció en Arauca provenía, al parecer, del grupo del Sur de Bolívar al mando de Jorge 40. Según la fiscalía de Arauca, una de las razones por la cuales las autodefensas tuvieron una vida tan corta fue por que sus integrantes no eran de la región, no eran raizales, por lo que les resultaba muy difícil hacerle frente al poder que las guerrillas habían tenido en la población,

⁴²Tabla extractada del informe del Observatorio de Derechos Humanos de la Vicepresidencia *Op cit*, p.4

en especial el del ELN, que lleva ejerciendo influencia por más de 30 años en el departamento.

Si bien no tuvieron una acogida y duración considerable, el grupo de autodefensas conocido como “Vencedores de Arauca” sí tuvo un protagonismo relevante en materia de narcotráfico. Miguel Angel y Víctor Manuel conocidos como “Los Mellizos Mejía Múnera”⁴³ son considerados por las autoridades como grandes narcotraficantes y están solicitados en extradición por el gobierno de Estados Unidos⁴⁴. Este grupo pertenece a la nueva élite de la mafia del cartel del Norte del Valle que está descentralizada en las zonas más inaccesibles del país, especialmente en los departamentos fronterizos con Venezuela y Ecuador.

En Arauca se desmovilizó este grupo el pasado diciembre y según las autoridades no se ha visto una reconfiguración de sus estructuras armadas, como ha pasado en el resto del país. Por el contrario, se afirma que en el departamento los territorios en los que ejercía influencia –Saravena, Fortul y Puerto Rondón- son ahora territorios de las FARC y del ELN, en menor medida.

La disputa de territorios por parte de FARC, ELN y Autodefensas ha traído como consecuencia una crisis social en el departamento. Los sectores sociales más afectados son los alcaldes, concejales, profesores, sindicalistas e indígenas⁴⁵. Este último grupo ha sufrido amenazas y ha sido acusado de colaborar con uno u otro bando. Los principales grupos afectados son Kumba, Tule y Guahibo⁴⁶ que en 2003 registraron 9 indígenas asesinados. Al igual que en el resto del país, los

⁴³ “Los Mellizos el mayor clan de Narcotráfico desde Pablo Escobar”. En Bel Ibérica. Disponible en: <http://www.belt.es/noticias/2004/febrero/13/mellizos.htm>

⁴⁴ Caso de los “Mellizos Mejía” un ejemplo de las dificultades que podría enfrentar la “ley de paras”. El Tiempo, Marzo 5 de 2006.

⁴⁵ Observatorio Vicepresidencia *Op cit*, p. 10 – 14.

⁴⁶ La población indígena en Arauca según el censo de 2003 ascendía a 3.591 personas. En su territorio se localizan 26 resguardos en un área de 128.167 hectáreas, lo que equivale al 0.42% del área indígena del país (30.845.231). Allí viven seis (6) pueblos indígenas, con la siguiente población: Uwa (1.124); Betoye (800); Sikuan (782); Hitnú (441); Kuiba (241); Chiricoa (173) y Piapoco (30). Departamento Nacional de Planeación (2003) “Información Básica Departamental, Arauca”, DNP, República de Colombia. Disponible en: http://www.dnp.gov.co/paginas_detalle.aspx?idp=92 Julio 17 de 2003

indígenas son presionados para sembrar y pasar la droga hacia Venezuela aprovechando su carácter binacional. Según la fiscalía en Arauca, “el ELN tiene acorralados a los indígenas en sus territorios sagrados, principalmente a las comunidades Uwas’s y Cubará, que están bajo tutelaje de la guerrilla, al punto que los líderes guerrilleros se esconden en estos territorios frente a las ofensivas de la Fuerza Pública”.

La cooperación con Venezuela es mínima, todo se hace a través de la cancillería mediante la oficina de asuntos internacionales. No hay intercambios de pruebas ni de ninguna clase de documentos, antes sí había una relación más cercana, según lo afirma la Fiscalía. Sin embargo un oficial de la Sijin asegura que se han estado haciendo acercamientos. Al igual que en los otros departamentos limítrofes con Venezuela, las autoridades entrevistadas ven una talanquera en las relaciones desde la llegada del presidente Hugo Chávez al poder, algunos lo acusan a él y a su fuerza pública de favorecer a la guerrilla de izquierda. Según un oficial del DAS en Arauca “hay un problema de corrupción generalizada”, sin embargo es necesario anotar que las autoridades de seguridad de los departamentos fronterizos son rotadas de sus puestos de trabajo cada 6 meses y generalmente son funcionarios de la capital o de ciudades intermedias que llegan a estos sitios con imágenes preconcebidas que dificultan conocer la realidad de estas alejadas regiones.

No obstante, Arauca, a diferencia de las otras regiones visitadas, tiene relaciones de cooperación muy estrechas entre fuerza pública, inteligencia y autoridades políticas. Esto se puede justificar en parte porque en el municipio de Arauca la Fiscalía, el DAS y la Sijin funcionan bajo la estructura de apoyo dentro de la Brigada XVIII. Así mismo, los funcionarios apoyan la política de seguridad democrática del presidente Álvaro Uribe y afirman que a pesar de la campaña de deslegitimación por parte de algunas ONG’s del departamento, la política ha sido exitosa en tanto que ha permitido desmovilizar a los paramilitares, gracias a la acción de la fuerza pública, las negociaciones bajo el amparo de la ley de justicia y

paz y la efectividad con la que se implementó la estrategia de informantes civiles ó cooperantes bajo la red conocida como “lunes del informante”.

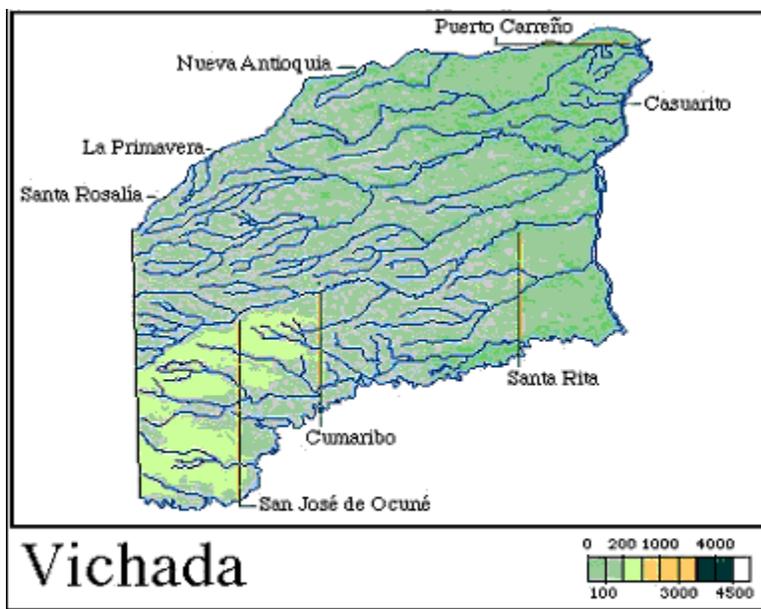
1.1.4. Vichada

Con 100.242 km cuadrados y 96.138 habitantes, según proyección del DANE para 2005, Vichada es un territorio muy extenso y poco poblado, con índices de desarrollo muy incipientes.⁴⁷ El 89.9% de su población tiene Necesidades Básicas Insatisfechas.⁴⁸ El departamento comprende los municipios de Puerto Carreño, con 12.000 habitantes, La Primavera, Cumaribo y Santa Rosalía. El ecosistema de llanos del Orinoco se caracteriza por su fragilidad, pues la vegetación de bosques de galería, llamados “matas de monte”, es la única que permite cultivar pequeñas parcelas, a condición de rotar áreas de cultivo y dejar largos períodos de descanso para la recuperación del suelo, como acostumbraban hacer las comunidades indígenas cuando disponían anteriormente de casi toda la región para sus ciclos migratorios.⁴⁹

⁴⁷ Según proyecciones del DANE, para 2005 el Departamento cuenta con una población de 96.138 habitantes (representa cerca del 0,2% del total nacional), de los cuales el 16,28% aproximadamente se encuentran ubicados en las cabeceras urbanas y un 83,7% en el sector rural. . Dirección Nacional de Planeación DNP “Información Básica Departamental, Vichada”, República de Colombia, Abril 2003. Disponible en http://www.dnp.gov.co/paginas_detalle.aspx?idp=107

⁴⁸ En el censo de 1993 Vichada presentó un porcentaje de analfabetismo para población mayor a 15 años de 18,6%; la cobertura de acueducto para 2001 fue de 38,3% y la de alcantarillado de 7,3%. El porcentaje de población con NBI en el Vichada para 1993, de acuerdo con el Censo del DANE, fue de 89,8% mientras el promedio nacional se ubicó en 37.21%. DNP, 2003 *ibíd.*

⁴⁹ “La agricultura, incipiente, tiene como destino sólo el autoconsumo a causa de las condiciones de aptitud del suelo, limitación de la mano de obra y altos costos de producción y transporte. Se destacan en orden de extensión el algodón, maíz, y plátano, cuyas producciones se logran con sistemas tradicionales y un mínima técnica en las vegas de los ríos Meta, Orinoco y Guaviare”. DNP, 2003. *ibid*



Fuente:IGAC

En: http://www.dnp.gov.co/paginas_detalle.aspx?idp=165

Departamento Nacional de Planeación (2003) “Información Básica Departamental, Vichada”, DNP, República de Colombia, Junio de 2003.

La mayoría de sus suelos al norte del río Vichada son pobres en materia orgánica, excesivamente ácidos y cubiertos de pastos naturales poco nutritivos. Por esa razón predomina una ganadería extensiva muy poco rentable, que no compite por los altos costos de transporte a los mercados, con las del Meta y Casanare. El equilibrio ecológico en esta zona depende de la existencia de los pequeños bosques de galería que protegen las fuentes de agua y por esa razón es devastador el impacto de la deforestación para los cultivos de coca.

La población indígena⁵⁰ de los Sicuani, Piapoco, Piaroa, Puinave, Kurripaco y Sáliba, reducida ahora a 45 comunidades territoriales y 19.731 habitantes, cuenta

⁵⁰ “En el departamento del Vichada se localizan 19.731 indígenas, distribuidos en los siguientes pueblos: Sikuani (14.475); Piapoco (3.242); Piaroa (691); Puinave (570); Kurripaco (492); Sáliba (261). La población total indígena del departamento asciende a 19.731 individuos, es decir, el 22.96% de la población del departamento (85.921) y el 2.51% de la población indígena del país (785.356). En su territorio existen 43 resguardos indígenas los cuales comprenden un área total de

con 43 reservas legales que en muchos casos han agotado sus matas de monte y por tanto no permiten la supervivencia con la tecnología de barbecho largo que dominan los indígenas. Por esa razón están en la situación más vulnerable para ser subordinados a las necesidades de mano de obra del narcotráfico, mediante la combinación de la coerción y las relaciones salariales. Los indígenas son reclutados para laboratorios y para transporte de droga en su “catumare”, una canasta grande de palma tejida que llevan en la espalda. Para escapar a ese trabajo forzado no tienen otra opción sino la de desplazarse hacia Puerto Ayacucho, en Venezuela. Muchos indígenas han decidido ahora vivir allá, porque el gobierno venezolano les da dinero, entre otras, para sembrar yuca amarga para preparar el casabe, base de su alimentación⁵¹.

Después de haber sido territorio de los negocios de narcotráfico de Carlos Ledher durante los años setenta y comienzos de los ochenta, en los últimos años Vichada ha tenido una expansión de las áreas de cultivo de coca bajo control del Frente 16 de las FARC, comandado por el “Negro Acacio”, que también controla las operaciones de esa guerrilla en el Guainía.⁵² Según información del ejército, el frente 16, creado en 1983, tiene 320 combatientes distribuidos en ocho compañías, que cubren un extenso territorio con epicentro en el municipio de Cumaribo, a 397 Km. de Puerto Carreño, donde hay cultivos y laboratorios de base y de cristalización, zona que comprende a San José de Ocué, Chupave, Guérima y Puerto Príncipe. Hasta el 2001, cuando fue capturado en la operación Gato Negro, el narcotraficante brasilero Fernandinho fue socio del frente 16 y vivió en Puerto Príncipe, una inspección de Cumaribo.

Mientras los cultivos de coca estaban antes sólo en el sur del Vichada, cubierto con vegetación selvática, ya están aumentando cerca de Puerto Carreño y en la

1.996.336 hectáreas, 19.92% del área del departamento y el 6.47% del área total indígena (30.845.231 hectáreas)”. DNP. *Ibíd* 2003

⁵¹ Apartes de la entrevista con el Comandante de la Policía Departamental de Puerto Carreño, Vichada. Septiembre 22 de 2005.

⁵² El área cultivada con coca en el Departamento de Vichada parece mantenerse alrededor de las 3.800 y 5.000 hectáreas durante los últimos cinco años. Sin embargo se observó un pico de área sembrada en el año 2001 al haber sido detectadas unas 9.166 has., ver Tabla 1.

Primavera, Matiyure y la vereda La Esmeralda, donde el bosque de galería se reduce a las matas de monte que protegen fuentes de agua. El impacto ambiental de la expansión de cultivos de coca al norte del Vichada es mucho peor que el causado al sur del departamento, porque ocasiona la desertificación de extensas áreas de sabana.

La región comprendida entre los ríos Vichada y Guaviare está dominada por las FARC, quienes usan los ríos para el transporte de droga y la entrada de armas. Ninguno de los dos grupos armados tiene control sobre el río Meta, aunque “Los Carranceros”, al servicio de Víctor Carranza, lo tuvieron varios años⁵³. Esta región al norte del departamento del Vichada tiene comunicación aérea y terrestre con Venezuela, desde donde se despacha droga al exterior.

Arauca tiene 1.552 hectáreas de coca, ocupando el décimo puesto de los departamentos productores en el ámbito nacional y el quinto puesto de los departamentos fronterizos productores. En 2004 fueron destruidos 40 laboratorios de base y uno de cristalización.⁵⁴ La Presidencia de la República⁵⁵ tiene un estimativo de 150 pistas clandestinas en su mayoría usadas para fines ilícitos, que muestran la importancia de los departamentos limítrofes con Venezuela como nuevos epicentros de producción y embalaje de narcóticos. Su situación fronteriza los hace especialmente idóneos para abastecerse desde Venezuela con gasolina de contrabando para suplir las necesidades de transporte y de insumos para los laboratorios de droga. Así mismo, el intercambio de drogas por armas desde San Carlos de Rionegro, en Venezuela, es un indicador de la porosidad de la frontera.

⁵³ Apartes de la entrevista realizada a la SIJIN y a la policía Judicial de la Policía. Puerto Carreño, Vichada. Septiembre 24 de 2005.

⁵⁴ En Arauca nuevos resultados contra el narcotráfico” Fuerzas Militares de Colombia Ejército Nacional. Disponible en: <http://www.ejercito.mil.co/index.php?idcategoria=84984> Septiembre 6 de 2005.

⁵⁵ “La OXY vuelve a invertir en Colombia. US\$ 80 millones para mantener activo a Caño Limón” Presidencia de la República de Colombia. Disponible en <http://www.presidencia.gov.co/cne/2003/julio/15/14152003.htm> Julio 15 de 2003

Según el ciclo climático, las incautaciones de droga se realizan en los ríos entre septiembre y diciembre, y el resto del año en carreteras del llano. Por tierra, la droga, se transporta en carrotanques o camiones, en paquetes envueltos en papel de aluminio, cubiertos de papel plástico y capuchas de caucho, que los aísla de la humedad ambiental.⁵⁶

El Estado ha ido fortaleciendo notablemente la presencia de las Fuerzas Armadas en el Vichada. En Casuarito, frente a Puerto Ayacucho, está la Policía, el Ejército y la Armada; igual que en Puerto Carreño. En Nueva Antioquia está la Armada, que hace inspección sobre el río Meta. En Marandúa hay una base de la FAC (a 250 kms de Puerto Carreño) que ejerce vigilancia aérea de todo el oriente del país⁵⁷. Esto se ha traducido en el aumento de los decomisos y capturas por narcotráfico durante el 2005. Según la policía, durante el 2004 se fumigó una extensión de 1.444 hectáreas, sobre un área de cultivos calculada en 4.000 hectáreas.⁵⁸

La estrategia militar ha buscado cercar al frente 16 y durante 2005 ha logrado la reducción de 30% de sus efectivos y su parcial desplazamiento hacia el Guainía y Vaupés, donde el ejército intensifica la ofensiva actualmente. Esto ha afectado su capacidad de reclutamiento, que recae forzosamente en los indígenas, para ser usados por su manejo del medio natural⁵⁹. Los indígenas del llano no son cultivadores ni consumidores de hojas de coca, pero son útiles para el transporte por su adaptación a la movilidad territorial, que los ha vuelto expertos caminantes de las sabanas.

⁵⁶ Entrevista al Fiscal Regional del Vichada, Puerto Carreño, Septiembre de 2005.

⁵⁷ Apartes de la entrevista al Comandante de la Policía Departamental de Puerto Carreño, Vichada. Septiembre de 2005.

⁵⁸ *"En el departamento de Vichada [...] el cultivo de coca alcanzó su record de 9.200 ha en 2001. Disminuyó en un 46% entre 2001 y 2002, y se mantuvo relativamente estable desde entonces, con una variación entre 4.000 y 5.000 ha. La aspersión aérea no fue importante en el departamento, excepto en el año 2001, cuando llegó a 2.800 has"*. Naciones Unidas UNODC 2005. *Op cit.*, p. 31.

⁵⁹ Apartes de la entrevista a oficiales del Comando Conjunto de Oriente en Puerto Carreño, Vichada. Septiembre 23 de 2005.

Las autodefensas del BCB⁶⁰, con 250 hombres bajo el mando de Javier Montañés ("Macaco") y Julián Bolívar, han llegado a disputar con las guerrillas el control de territorios y rutas del narcotráfico y ejercen su influencia en el municipio de La Primavera, con irradiación hacia los caseríos de Sunape, El Viento, San Teodoro y, en disputa con las FARC, hacia San José de Ocuné, puerto sobre el río Vichada. El BCB reemplazó al frente de las Autodefensas de Meta y Vichada de las AUC, que se desmovilizó parcialmente el 6 de agosto de 2005.

A juicio de los comandantes militares, en Vichada tampoco se observa un conflicto armado entre autodefensas y guerrillas, sino una distribución territorial y una articulación funcional con las empresas de narcotraficantes, que compran a unos y otros. Al norte, hacia las riberas del Meta, dominan las autodefensas y controlan las rutas de exportación de drogas hacia Venezuela. Al sur domina la guerrilla y tiene sus rutas hacia el oriente por los ríos Vichada y Guaviare. A juicio de las autoridades militares, si hubiera otra fuerza de infantería fluvial se podrían frenar la existencia de laboratorios de cristalización en el Guaviare y Vaupés. En la zona de río Guaviare se intercambia droga por armas para las guerrillas.

Los dominios de guerrillas y autodefensas, articulados al negocio del narcotráfico, reordenan la propiedad de la tierra y cambian las pautas de poblamiento, en perjuicio de los territorios de las comunidades indígenas, que no pueden disponer de áreas suficientes para la rotación espacial de los cultivos de yuca brava, base de su alimentación. El INCODER ha iniciado una campaña de titulación de baldíos, con la meta de asignar entre 300 y 350 títulos, y se estima que hay una demanda grande por la asignación de 1.200 baldíos en Vichada. La mayor solicitud de títulos ocurre principalmente en Puerto Carreño, con 200 y en La

⁶⁰ "El Estado mayor conjunto del BCB está compuesto por "Julián Bolívar" (Jefe del Estado Mayor Negociador de las AUC); "Javier Montañés" ("Macaco"); "Pablo Sevillano" (Bloque Libertadores del Sur); "Pablo Mejía" (bloque Vencedores de Arauca); "Sebastián Colmenares"; "Rafael Meza"; "Eduardo Victoria" e Iván Roberto Duque Gaviria, alias "Ernesto Báez", este último a cargo de la dirección política de las AUC." Fundación Ideas para la Paz, Análisis, "La tercera Generación, en Siguiendo el conflicto: hechos y análisis de la semana". Número 25. Agosto 12 de 2005

Primavera, con 100 casos.⁶¹ Esto significa que la migración de colonos atraídos por los ingresos de la economía de la coca es precursora de un proceso de apropiación de la tierra, que posteriormente da origen a empresas agropecuarias y forestales, que consolidarán un modelo de colonización fundado en la economía ilícita y el control armado del territorio.

Hay también una solicitud de ampliación de resguardos indígenas y creación de nuevos resguardos. Muchos indígenas migran a Venezuela en busca de áreas de cultivo, obedeciendo a su tradicional pauta semi-nómada de rotación de asentamientos en grandes ciclos migratorios. Otros se han visto desplazados hacia Puerto Carreño y otras poblaciones en condición de indigentes, al perder la base material de sustento.

La mayor dificultad que existe para el control militar y policial del Vichada es la inmensidad del territorio despoblado que comprende. Con 305 Kms de frontera con Venezuela, que incluye los Estados de Apure, Bolívar y Amazonas, el Vichada tiene infinidad de trochas abiertas en la sabana por las huellas de los vehículos en verano, y multitud de caminos ciegos en invierno, cuando las áreas bajas se inundan y el viaje requiere dar la vuelta alrededor de ellas. Los ríos Meta y Vichada son navegables por planchones y pequeñas embarcaciones y hay muchas pistas de aterrizaje para avionetas y pequeños aviones. Idéntica situación se presenta en los llanos venezolanos, de manera que la industria del narcotráfico encuentra un ambiente libre para improvisar rutas de transporte de las drogas y para cambiarlas cuando aparece algún control de la fuerza pública en un proceso de integración espontánea. Entre Puerto Carreño y Antioquia, en Apure, hay tres bases de la Guardia Nacional. En los estados de Bolívar y Amazonas hay 12.200 hombres de tropa venezolana, frente a Colombia que tiene 3.500 en Vichada y Guainía⁶².

⁶¹ Entrevista al Director de INCODER en Puerto Carreño

⁶² Datos del Comando Conjunto de Oriente con sede en Puerto Carreño, Vichada, que tiene jurisdicción sobre Vichada y Guainía.

Desde hace cinco años no se realizan operaciones conjuntas de los dos ejércitos en la región fronteriza en persecución de las guerrillas. Las relaciones de cooperación policial con las autoridades venezolanas han sufrido un deterioro considerable a raíz de la captura de Rodrigo Granda en Caracas, en diciembre de 2004. Anteriormente eran fluidas y la cooperación permitía coordinar capturas y decomisar cargamentos. A pesar de eso, ha habido grandes incautaciones de drogas, de hasta tres toneladas, por las autoridades venezolanas.⁶³

Los índices de violencia en el Vichada parecen estar asociados a la presencia de grupos armados irregulares. De acuerdo con la información suministrada por la DIJIN, durante el período 1996 –2002 en el departamento del Vichada se presentaron 28 secuestros, 11 masacres, 4 ataques a la población, 89 homicidios, y 389 hogares fueron desplazados.

1.2. Frontera con Brasil

La frontera con Brasil corresponde a los departamentos de Vaupés y Amazonas. En los dos hay cultivos en expansión y laboratorios de cristalización de cocaína, y desde ambos se usan los ríos para navegar hacia el Amazonas, donde se acopia y despacha al exterior. Las acciones de erradicación de los cocales del Guaviare, Caquetá y Putumayo impulsaron una nueva corriente de colonización coquera que desciende por los ríos Guayabero, Vaupés y Putumayo.⁶⁴

⁶³ Entrevista al Comandante del Ejército en Puerto Carreño.

⁶⁴“ La frontera con Brasil (1.640 kilómetros) tiene menos impacto en el conflicto pues está mejor patrullada del lado brasileño, por cerca de 200.000 soldados. Brasil tiene un esquema de defensa que dificulta el paso no detectado de barcos por cualquier río de la región amazónica. No obstante, el creciente flujo de droga desde Colombia indica que la frontera sigue planteando un problema de seguridad.” En **Las Fronteras de Colombia: el Eslabón Débil de la Política de Seguridad de Uribe**, ICG, Informe sobre América Latina No. 9, 23 de Septiembre de 2004, (Entrevista del ICG, Bogotá, 1 de septiembre de 2004.)

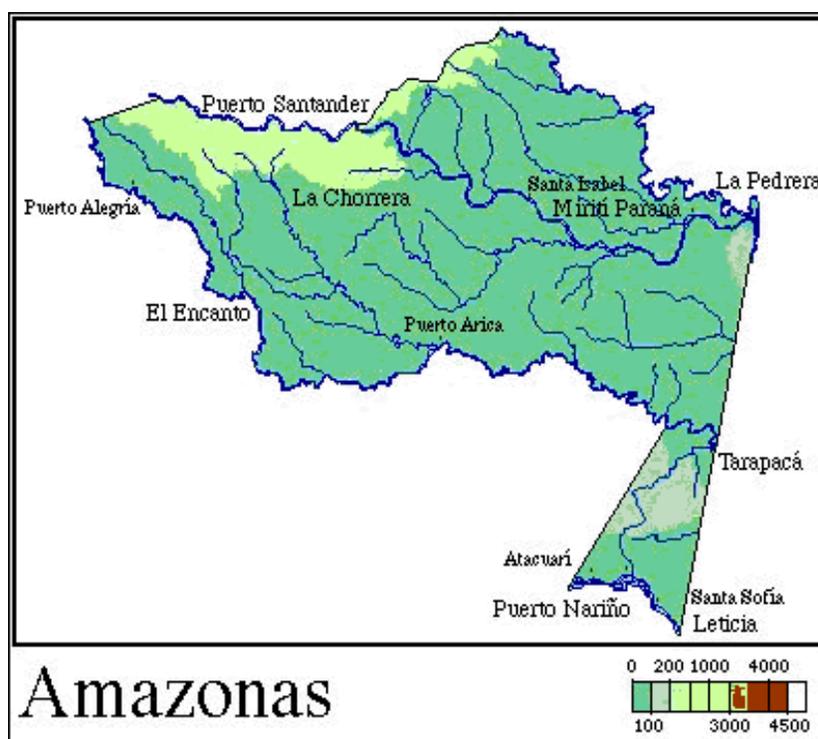
La cuenca del Amazonas es el ecosistema más apto para los cultivos de coca y también donde la deforestación causa los mayores daños ambientales. A diferencia de otros productos de la selva, como la quina y el caucho, la coca es capaz de sostener asentamientos humanos muy distantes de las corrientes de colonización impulsadas por la ganadería. El hecho es que la ilegalidad genera un aumento en el precio del producto que permite dichos asentamientos a pesar de los costos impuestos por la lejanía. En efecto, ésta facilita los cultivos ilícitos al dificultar los controles del estado. Además, la distancia reproduce sistemas de economía de enclave, en los cuales los empresarios ejercen posiciones monopolistas al controlar precios de venta de mercancías y monopsonistas al controlar los precios de compra de la base y la cocaína. Esta situación permite explotar al campesinado, cuyo ingreso real es muy bajo a pesar de cultivar coca.

Al final del proceso de colonización, los campos de coca terminan en pastos a la espera de ganados, con lo que se acentúa una pauta muy ineficiente de uso del suelo, que debería mantenerse en conservación de biodiversidad. Infortunadamente, la biodiversidad en sí o la producción de oxígeno no tienen mercado y no generan ingresos. Desde el punto de vista social, el poblamiento coquero tiene alta volatilidad y desorganización, con mano de obra de raspachines y colonos que cumplen el rol de empresarios agrícolas y productores de base de coca.

1.2.1. Amazonas

Con 109.664 km² y 80.487 habitantes en 2005, según proyección del DANE, Amazonas es uno de los departamentos más pobres del país, con un Índice de Necesidades Básicas Insatisfechas del 69,5%, casi el doble del índice nacional, de 37,21 %. Es un departamento totalmente selvático, con una población indígena de

20.521 personas y una colonización que crea economías de enclave basadas en la extracción de productos del bosque.⁶⁵



En: http://www.dnp.gov.co/paginas_detalle.aspx?idp=90

Departamento Nacional de Planeación (2002) *“Información Básica Departamental, Amazonas”*, DNP, República de Colombia, Noviembre de 2002.

Leticia vivió un auge de negocios del narcotráfico a finales de los años setenta y comienzos de los ochenta, cuando empresarios de las drogas importaban la pasta básica desde el Perú y Bolivia y cristalizaban la cocaína en laboratorios propios.

⁶⁵ “En el departamento del Amazonas existen 19 resguardos indígenas pertenecientes a 26 etnias; son predominantes la Tikuna, Witotos, Yucunas y Tanimuka. Por ser un área de colonización, el volumen poblacional es creciente y sus datos censales son aproximados, dado el constante nomadismo de sus habitantes; además, presenta una densidad poblacional baja. En relación con los grupos indígenas, éstos se localizan a orillas de ríos y caños, distribuidos en caseríos bastante dispersos; algunos de ellos han reducido tanto su población que conviven con otras comunidades para evitar su extinción. La población indígena del departamento asciende a 20.521 indígenas, es decir, el 2,61% de la población indígena del país (785.356), y el 27.58% de la población total del departamento.” Departamento Nacional de Planeación DNP *“Información Básica Departamental, Amazonas”*. República de Colombia, Noviembre de 2002.

Esta bonanza enriqueció a los personajes locales que vivían del comercio y produjo un aumento de consumos suntuarios, que ahora se recuerda con nostalgia. El negocio atrajo inmigrantes de otras regiones del país y también ocasionó un aumento de la violencia.

Parte de la bonanza se reflejó en la construcción de hoteles y comercios y en el aumento del número de motos, embarcaciones y lanchas con motor, así como en consumos suntuarios. La bonanza de la coca siguió las mismas pautas que habían tenido otras bonanzas de la economía extractiva, como la que se vivió con el caucho. En ella los caucheros endeudaron con mercancías a los indígenas en un régimen de servidumbre o esclavitud forzada, que desintegró sus comunidades en nombre del progreso y la civilización. Manaos, en Brasil, e Iquitos, en Perú, florecieron con el auge del caucho durante la Segunda Guerra mundial. Los altos precios de todos los bienes y servicios importados, proporcionales a la distancia de los mercados extra-regionales, disminuyen los ingresos reales de la mano de obra y los concentran en pocos intermediarios conectados con el mercado externo. Igual ocurre con los campesinos cultivadores de coca, que producen pequeñas cantidades de base de cocaína para usarla como moneda en la compra del mercado.

En los últimos cinco años ha comenzado a crecer el área cultivada con coca en el Amazonas.⁶⁶ La policía departamental menciona la existencia de unas 800 hectáreas de pequeños cultivos en Mirití-Paraná, río Apaporis, limítrofe con Vaupés, Minas de Oro, Tarairá, Puerto Santander, Puerto Limón, Marandúa, Buruburí, Puerto Nariño y Puerto Arica. El comandante militar sospecha que se está preparando un nuevo auge de cultivos de coca en pequeña escala. Hay cultivos dispersos que se encadenan a mayores distancias del río con los que

⁶⁶ De acuerdo con las cifras de Naciones Unidas, el área cultivada con coca en el Amazonas ha pasado de 532 has. en 2001 a 738 has. en Diciembre de 2004, logrando el pico de área cultivada (784 has.) en 2002. Naciones Unidas UNODC, 2005. *Op cit.*, p 15

aparecen cerca de las riberas, de manera que se comunican por trochas pero se ocultan a la inspección terrestre o fluvial.⁶⁷

En los dos últimos años ha aumentado la inmigración proveniente del Putumayo. A Tabatinga, cuyo muelle sirve a Leticia desde cuando el río se retiró del suyo, llegaron en el 2004 unas 1.000 personas de ese departamento que entraron al Brasil como turistas pero cuyo destino era el departamento del Amazonas. Esta migración se acentuó y en los primeros tres meses del 2005, según el cónsul colombiano, ya habían entrado otros mil. Estos datos indican que ha comenzado un desplazamiento de colonos y trabajadores para la industria de la coca en el Amazonas.

La importancia de Amazonas para el narcotráfico es el uso de las vías fluviales que desembocan al río Amazonas en Brasil y de allí van al resto del mundo. Esta es la ruta de salida alterna al Pacífico para la producción de los cultivos y laboratorios de toda la cuenca del río Putumayo, tanto en Colombia como Ecuador y Perú. Un prefecto peruano calculaba que en su frontera con Colombia se cultivaba entre 4.000 y 5.000 hectáreas de coca.⁶⁸ En el río hay pistas clandestinas y también laboratorios en embarcaciones que se pueden desplazar de un lado a otro. De Brasil provienen insumos para Colombia, pero también hay laboratorios de cristalización y comercialización por rutas aéreas y fluviales.⁶⁹

⁶⁷ Entrevista a un oficial de inteligencia del ejército en Leticia, Septiembre de 2005.

⁶⁸ Entrevista al Cónsul colombiano en Tabatinga, Brasil. Septiembre 18 de 2005

⁶⁹ In Brazil, where organized crime has come to control the gun and drug trade, there is an increasing demand for both products. In Rio de Janeiro alone, analysts who study violence in the shantytowns estimated in 2003 that there were at least 10,000 armed gang members. This number has likely grown significantly.

Organized crime actors in Brazil purchase weapons from providers in the tri-border area joining Brazil, Paraguay, and Argentina. There are so many black market weapons in Brazil that organized crime has been trading weapons for pure cocaine with the FARC since 2000. Some claim this barter system originated in a deal between the Red Command crime faction in Rio de Janeiro, and members of the FARC in southeastern Colombia.

Recent studies conclude that there are some four million illegal weapons in the hands of organized crime in Brazil. Brazil's demand for cocaine has grown, placing the country at the top of the list of worldwide cocaine markets, behind only the US. Both the CIA and Interpol agree that up to 60 per

Desde Manaus se traen búfalos, cemento y combustibles en bongos y en ellos hay caletas para llevar la droga de regreso. Muchas caletas están sumergidas bajo el casco de las embarcaciones, donde es imposible detectarlas. Algunos grandes comerciantes de Leticia siguen traficando drogas en embarcaciones hacia Manaus y reinvierten las ganancias en otras partes.⁷⁰

En Amazonas ha tenido presencia el frente 63 de las FARC –Frente Amazónico– bajo el mando de “Tiberio”, quien tiene influencia en La Pedrera y Tarapacá, donde sale de Colombia el río Putumayo y cambia su nombre a Río Negro en Brasil. Este frente también opera en Caquetá y Putumayo, regiones donde está actualmente replegado por la Operación Plan Patriota del ejército. Leticia tiene milicianos de las FARC que hacen inteligencia, han infiltrado la policía y el ejército y se relacionan con la población.

En Amazonas hay una presencia grande de las Fuerzas Armadas, con la Brigada Amazónica, que también cubre territorios cercanos de Vaupés, Caquetá y Putumayo. La policía nacional en el departamento cuenta con 324 hombres. El ejército ha sido bastante activo en la lucha contra los cultivos y laboratorios de coca, pero su papel estratégico en la actual coyuntura es proteger la retaguardia del cerco militar que envuelve al Caquetá y Putumayo, dentro del Plan Patriota. El radar de la base Militar de Tres Esquinas cubre el espacio aéreo hasta el Amazonas.

Brasil tiene un buen desarrollo militar y ha intensificado su presencia en la frontera amazónica. Hay buen intercambio de información con las autoridades fronterizas

cent of the cocaine that enters Brazil stays in Brazil, while the rest lands in Europe, Africa, and in some cases the Middle East and Asia.

Venezuela, known as a major cocaine transit country, extends this black market east from Colombia as far as Trinidad and Tobago, where radical Islamic groups are believed to be heavily involved in gun smuggling

En Sam Logan, **Guns, Cocaine: One Market Out Of Control**, International Relations and Security (Zurich), En <http://www.isn.ethz.ch/news/sw/details.cfm?id=14921>

⁷⁰ Entrevista realizada al Director de la DIAN en Leticia, Amazonas. Septiembre 16 de 2005.

colombianas y muchas de las incautaciones han sido por trabajo conjunto, pero la cooperación es mayor en el ámbito policial. La información obtenida por medio de los radares SIVAM/SIPAM es restringida y se comparte sólo entre Caracas y Bogotá y no llega a las autoridades locales.

1.3. Fronteras con Ecuador y Perú

La frontera de Colombia con Ecuador está conformada por dos zonas naturales, una que corresponde a la selva amazónica y que en Colombia hace parte del departamento del Putumayo –colindante también con el Perú- y la otra que corresponde a la cordillera de los Andes, cuyas estribaciones desembocan en el océano pacífico y que conforma, en buena parte, el departamento de Nariño. En Putumayo predomina la colonización del Guamuéz, acelerada por los yacimientos petrolíferos de Orito y La Hormiga, y en Nariño predomina el campesinado minifundista y las comunidades territoriales indígenas.



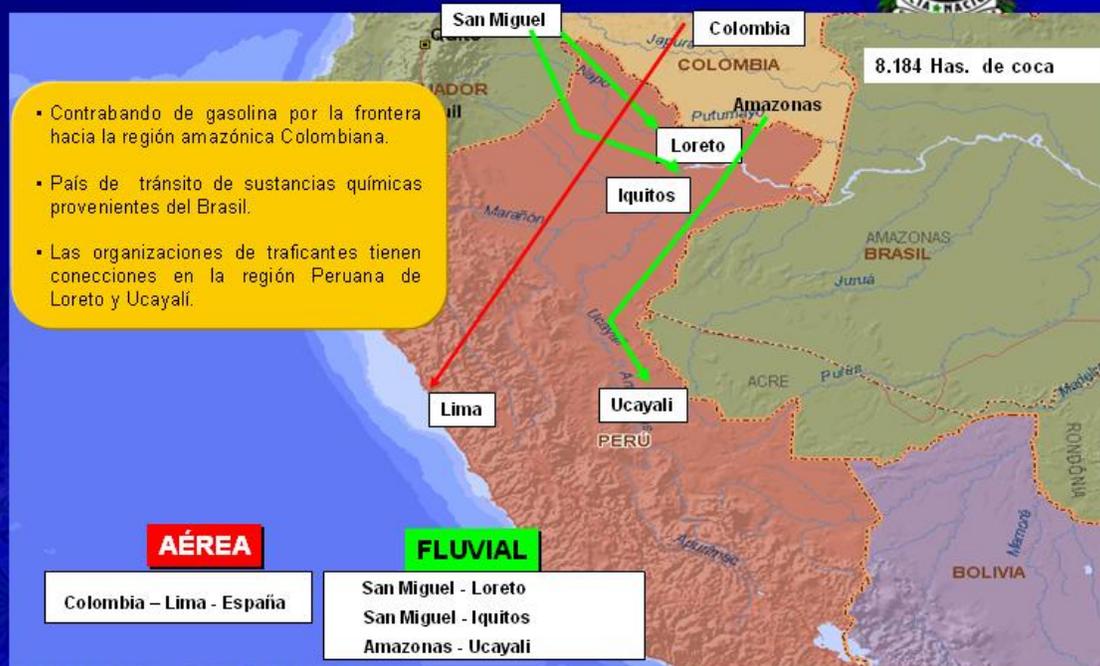
Fuente: Policía Nacional de Colombia, I Encuentro Regional de Directores de los Cuerpos Policiales, presentación en Power Point. 2005

Los 600 kilómetros de frontera compartida entre los dos países son un territorio tan extenso como difícil de controlar por ambos gobiernos. La baja presencia estatal, el cultivo de ilícitos, el paso de precursores químicos por vía fluvial y terrestre, los efectos de las fumigaciones con glifosato, los hostigamientos tanto de la guerrilla de las FARC como de los grupos de autodefensa y el lavado de activos en suelo ecuatoriano, facilitado por la dolarización, han hecho que el tema fronterizo sea prioritario y sensible para las dos cancillerías.

Una parte importante de la campaña militar del Plan Colombia está centrada en el Putumayo, donde se concentraron las fumigaciones y se redujo drásticamente las hectáreas cultivadas. (Gráfico 1)⁷¹. Sin embargo, el aumento de cultivos en los departamentos de Nariño y Amazonas evidencia el efecto de desplazamiento inducido por la fumigación, en detrimento de las zonas selváticas erosionadas con el objeto de cultivar coca en sitios cada vez más distantes.

⁷¹ De 66.000 ha cultivadas en el 2.000 se pasó a 4.386 ha. en el 2.004. ONUDD, 2005. *Op cit.*, p. 15

Tráfico de drogas al Perú



Fuente: Policía Nacional de Colombia, I Encuentro Regional de Directores de los Cuerpos Policiales, presentación en Power Point. 2005

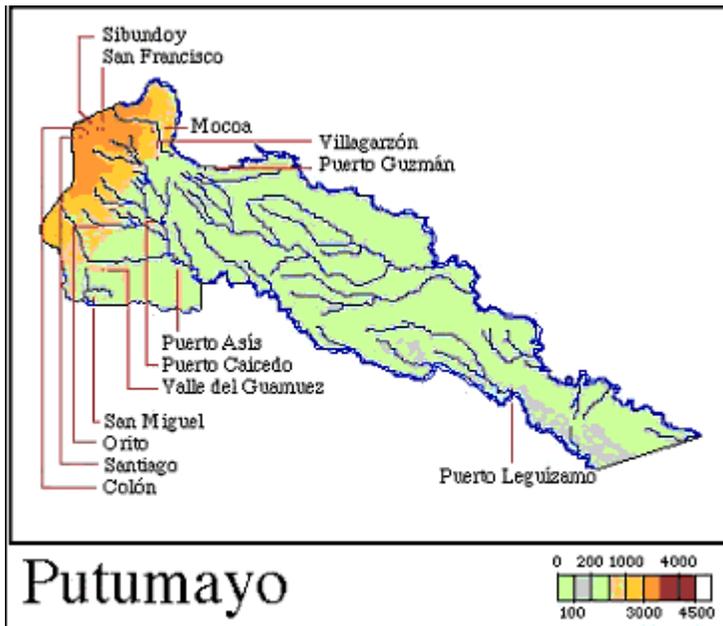
En Perú el narcotráfico ha aumentado en los últimos años. Iquitos, ciudad selvática de 170.000 habitantes, está activando su papel en el narcotráfico y se observan otra vez los síntomas de las inversiones del dinero de la droga, entre ellos por parte de algunos colombianos.⁷² Los cultivos se han extendido por la ribera peruana del Putumayo.

1.3.1. Putumayo

El departamento tiene tres regiones bien diferenciadas: el Alto Putumayo, que pertenece al Macizo colombiano, de clima frío, donde está el Valle de Sibundoy,

⁷² La densidad de población de Iquitos es de 478.3 habitantes por km² y la proyección de población al año 2002 fue de 169.707 habitantes. Instituto Nacional de Estadística e Informática - INEI, Banco de Información Distrital. Disponible en, <http://desa.inei.gob.pe/mapas/bid/>

con población indígena; el Medio Putumayo, de clima medio, donde está Mocoa, antigua colonia penal que es hoy la capital, y el Bajo Putumayo, de clima cálido, entre Puerto Asís y Puerto Leguízamo, donde está la colonización del valle del Guamuéz y los campos petroleros.



Fuente:IGAC

En: http://www.dnp.gov.co/paginas_detalle.aspx?idp=112
Departamento Nacional de Planeación (2003) “*Información Básica Departamental, Putumayo*”, DNP, República de Colombia, Agosto de 2003.

Con una extensión de 24.885 km² y una población proyectada para 2005 de 378.790 habitantes, el Putumayo ha recibido una corriente migratoria desde comienzos de los años sesenta, impulsada inicialmente por el descubrimiento de yacimientos petroleros de Orito y La Hormiga. La colonización desplazó poblaciones indígenas que antes ocupaban el Bajo Putumayo y las redujo a zonas de refugio delimitadas, con grave amenaza a su supervivencia.⁷³

⁷³ “En este departamento habitan diez pueblos indígenas: Inga (13.916), Kamëntsá (4.773), Embera (1.162), Nasa Páez (1.002), Uitoto (918), Awa (791), Cofán (748), Siona (734, Katío (198) y Coreguaje (149), los cuales totalizan una población de 24.391 personas, es decir, el 3.11% de la población indígena del país (785.356) y se agrupan en 32 resguardos que comprenden un área de 143.299 hectáreas, lo que equivale al 5,76% del área departamental (2.488.500 hectáreas) y al

El Putumayo fue primero un lugar de llegada y tránsito de la base de coca importada del Perú y Bolivia a comienzos de los años ochenta y luego, cuando la producción entró en crisis en esos países, en región productora de cocaína desde finales de los años ochenta. La mayoría de su territorio hace parte de la cuenca amazónica y colinda con Ecuador y Perú en una frontera que facilita el tránsito de personas y bienes, lícitos e ilícitos.

El fracaso económico de la colonización del bajo Putumayo, que se puede atribuir a la falta de vías de comunicación, permitió a los narcotraficantes disponer de una base social dispuesta para expandir los cultivos de coca, al financiar las siembras y asegurar un sistema eficiente de mercado, hasta llegar a ser el departamento con más hectáreas de cultivos de coca sembradas⁷⁴. Allí se han concentrado las tareas de fumigación aérea desde el año 2000 y se ha logrado una notable reducción del área cultivada. Como efecto de la recesión inducida por la destrucción de los cultivos se ha vivido una crisis social, con un alto nivel de desempleo, aumento de la pobreza, emigración y desplazamientos forzados por intimidación y violencia.⁷⁵

En el Putumayo tiene presencia del Frente 48 de las FARC (que cuenta con 449 efectivos en Puerto Asís) y tiene dominio entre las zonas de Piñuña Negro y Piñuña Blanco, Santa Rosa de Sucumbíos, El Empalme, Teteyé y Puerto Guzmán⁷⁶. La guerrilla controla corredores estratégicos entre Nariño, Caquetá, Guaviare y Meta, por lo cual tiene capacidad para acopiar la droga y despacharla

0.46% del área indígena nacional (30.845.231 hectáreas).” Departamento Nacional de Planeación DNP “Información Básica Departamental, Putumayo”. República de Colombia 2003.

⁷⁴ En 1.999 estaban sembradas 58.297 ha, en el 2.000, 66.022 y en 2.001, 47.120. ONUDD, 2005. *Op cit* p. 29

⁷⁵ 58.000 personas desplazadas entre 1.999 y 2.002. Para una ampliación del tema del desplazamiento en la frontera con el Ecuador véase Marcela Ceballos *Plan Colombia: Contraproductos y Crisis Humanitaria. Fumigaciones y Desplazamiento en la Frontera con el Ecuador*. Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento –CODHES- Octubre 2.003

⁷⁶ Apartes de la entrevista al Comandante de Policía de Puerto Asís, Putumayo. Octubre 5 de 2003. Véase también, entrevista con un oficial del CTI Ipiales, Nariño. Octubre 3 de 2005., y entrevista al Secretario de Gobierno de la Alcaldía Municipal de Ipiales, Nariño. Octubre 4 de 2005.

fuera de la región, especialmente a través de Ecuador hacia el océano Pacífico. La guerrilla tiene influencia hasta Lago Agrio, fuente petrolera en Ecuador⁷⁷, que se considera área de repliegue táctico porque no provoca enfrentamientos con la fuerza pública ecuatoriana.

El año 2.000 ocurrió la avanzada paramilitar que había anunciado Carlos Castaño, jefe de las AUC en ese año. Básicamente hubo presencia de una parte del Bloque Central Bolívar que operaba en Caquetá, Huila y Valle del Cauca. Después de controlar los cascos urbanos y sembrar el terror entre los cultivadores, el BCB disputó a las FARC una participación en el acopio y venta de la droga, hasta el 18 de septiembre de 2005, cuando se desmovilizó. Quedó en armas un reducto estimado por la policía en 70 hombres, que se hacen llamar Autodefensas Independientes –AUI– que tienen influencia en El Tigre y El Placer y controlan las vías fluviales de esa zona. No es propiamente una estructura paramilitar consolidada, sino básicamente un grupo de desertores de otras zonas, nuevos en el negocio, que cobran por kilo producido y también acopian para vender la cocaína a grupos de narcotraficantes de otras áreas del país, como los del Norte del Valle.

Los enfrentamientos que existen ahora entre las FARC y reductos de paramilitares son básicamente por el control territorial para capturar las rentas del negocio. Los campesinos cultivadores son acusados y asesinados por cualquiera de los dos grupos si hay indicios de colaboración con el otro. Por esta razón el desplazamiento ha aumentado al punto de llegar al primer lugar como departamento expulsor en el país.

Los cultivadores de coca tienen una historia de organización de marchas de protesta contra la erradicación forzada y durante el gobierno de Andrés Pastrana celebraron acuerdos de erradicación voluntaria a cambio de inversiones para un

⁷⁷ Apartes de la entrevista con uno de los operadores de Chemonics en Puerto Asís, Putumayo. Octubre 5 de 2005

desarrollo alternativo.⁷⁸ Aunque la inversión del Plan Colombia ha sido grande, los proyectos de desarrollo alternativo han funcionado en la medida en que están apoyados por procesos comunitarios de autogestión, pero su impacto en la población de cultivadores es todavía incipiente y los grandes cuellos de botella para el desarrollo regional, como las vías de comunicación, siguen sin resolverse.

La campaña de fumigación en el valle del Guamuéz ha desplazado los cultivos a nuevas zonas de bosque primario a lo largo del río Putumayo, en detrimento de la capa vegetal de la zona selvática, que en 5 ó 10 años se convertirá en un suelo infértil. Como resistencia contra la fumigación, los campesinos han elaborado estrategias rudimentarias para repeler la acción del glifosato, como rociar los cultivos antes de las fumigaciones con una melaza elaborada de panela o melaza, para que el químico se adhiera al dulce y luego regar nuevamente con agua y así evitar daños en las plantaciones de coca.

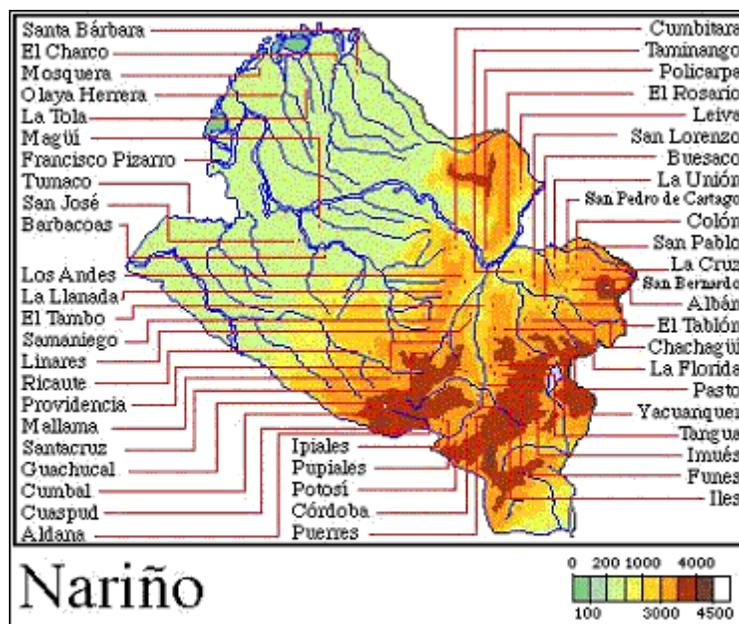
1.3.2. Nariño

El departamento de Nariño es básicamente la zona de confluencia de los tres ramales de la cordillera de los Andes y posee una gran variedad de pisos térmicos, donde se han adaptado desde plantas de coca, en la parte baja del departamento, hasta las de amapola, en la parte alta.

En Nariño se distinguen tres subregiones: la Costa Pacífica, la región Andina y la Amazónica, que colinda con Putumayo. Con una extensión de 33.265 km² y una población estimada por el DANE para 2005 de 1'775.973 habitantes, es básicamente rural, pues el 56% de su población vive en el campo. Pasto, con

⁷⁸ De acuerdo con el DNP *“En materia de erradicación, entre 2000 y 2002 se fumigaron 117,906 ha y se firmaron Pactos de Erradicación Voluntaria con 25,286 familias campesinas e indígenas, las cuales están vinculadas a cultivos adicionales como alternativa lícita de ingresos. Estas acciones se complementaron con inversiones cercanas a los US\$ 55 millones dirigidas a generar condiciones para el desarrollo, fortalecer las instituciones y estimular la creación de alternativas acordes con el potencial productivo del departamento. La construcción de la vía Mocoa-Pitalito disminuyó en 12 horas el tiempo del recorrido entre la capital del Putumayo y Bogotá. Se realizaron obras en 105 Km. de vías, 29 puentes, 2 aeropuertos y muelles [...] que contribuyen al desarrollo de las condiciones de competitividad de la región”* Departamento Nacional de Planeación DNP. “Información Básica Departamental, Putumayo”. 2003.

405.684 habitantes, concentra el 24% de la población. El 5% de su población es indígena y el 18% es de origen afro-colombiano. Nariño tiene el 74.7% de su población viviendo bajo la línea de pobreza y un 40.6% bajo la línea de indigencia. No obstante, el Índice de Necesidades Básicas Insatisfechas pasó del 26 al 22.9% entre los años 1996 y 2000.



Fuente:IGAC

En: http://www.dnp.gov.co/paginas_detalle.aspx?idp=110

Departamento Nacional de Planeación (2003) *“DEPARTAMENTO DE NARIÑO: SITUACIÓN ECONÓMICA, SOCIAL, FINANCIERA Y SECTORIAL: Evolución de los principales indicadores”*, DNP, República de Colombia, Mayo de 2003.

En el departamento ha sido evidente el aumento de los cultivos ilícitos. En 1.999 contaba con 3.959 ha. de coca y para el año 2.000 se registraron 9.349 hectáreas,⁷⁹ en un aumento sostenido que llegó al punto más alto el año 2003, con 17.628 hectáreas cultivadas. Por otro lado, Nariño es de los pocos departamentos que produce amapola (junto a Huila, Tolima, Cauca, Guajira y Cesar, en menor medida) y en el año 2.002 alcanzó el pico de producción en el ámbito nacional con

⁷⁹ En 2.001 bajó a 7.494 ha. pero en 2.002 se registraron 15.131; en 2.003 17.628 y en 2.004 14.154. ONUDD, 2005, *Op cit.*, p.15.

1.230 has. Al contrario de los cultivos de coca, los de amapola han descendido a más de la mitad en menos de dos años, por la campaña de erradicación del gobierno. En las cercanías al río Mira, Nurpi y en Tumaco se han adelantado programas de erradicación manual de coca con reinsertados.

El desplazamiento de los cultivos desde el Putumayo ha traído como consecuencia la migración de campesinos que van detrás del empleo que ofrecen los cultivos ilícitos. Hay zonas en especial a las que han migrado los cultivadores de hoja de coca como Llorente, más conocido como “el Putumayito”, Puerres, La Victoria, Junín y Barbacoas entre otros, todos con una alta presencia armada irregular.⁸⁰

Los cultivos ilícitos se dividen en zonas territoriales determinadas entre guerrilla de las FARC, el ELN y los paramilitares. Los cultivos de amapola, que producen ganancias muy superiores a las de la cocaína, ubicados en la parte alta del departamento, en límites con el Cauca, en poblaciones como Túquerres, Puerres, La Victoria, Córdoba, Potosí y Laguna de Vaca, están bajo vigilancia del Frente 48 de las FARC. En Puerres y La Victoria –sector estratégico- los cultivos son propiedad de la misma guerrilla, mientras en los otros sitios mantienen una presencia armada para evitar las incursiones del ELN y AUC. Las FARC tienen presencia en el Alto Magui con alrededor de 700 combatientes. Por su distribución geográfica, la guerrilla tiene 3 Frentes: Frente vía al mar, Frente caucano y Frente Valle de Sibundoy.⁸¹

El ELN tiene presencia armada en Piedra Ancha y Ricaurte, poblaciones limítrofes con el Putumayo, donde hay básicamente cultivos de coca. Las Autodefensas

⁸⁰ “En julio del 2004, en este pequeño reducto costero en el sur de Nariño (los municipios de Tumaco, Guapi y la zona entre los ríos Mataje y Mira), la policía y el ejército desmantelaron en una operación conjunta lo que según se dice es el complejo de producción de cocaína más grande hallado en Colombia desde la tristemente célebre “Tranquilandia” de Pablo Escobar: se destruyeron 62 centros con una capacidad de producción estimada en entre seis y ocho toneladas semanales.” En **Las fronteras de Colombia: el eslabón débil de la política de seguridad de Uribe**, Internacional Crisis Group –ICG-, Informe sobre América Latina No. 9, 23 de septiembre de 2004, Quito-Bruselas

⁸¹ Entrevista al Director de la Sijin de Nariño, en Ipiales. Octubre 3 de 2005.

tienen presencia con el Bloque Libertadores del Sur en Barbacoas y Junín. A pesar que este bloque se desmovilizó en Junio de 2.005, quedan reductos que se financian, al igual que el Bloque Sur, del narcotráfico. Los reinsertados ahora son grupos de delincuencia organizada y cobradores a sueldo, articulados con importantes redes de narcotraficantes. Hay alianzas entre guerrilleros y paramilitares con escolta de ambos bandos para sacar droga.⁸² En una operación de interceptación se encontró que tenían conjuntamente 17 toneladas de cocaína lista para exportar en Tumaco.⁸³

Entre los nuevos grupos que se conformaron después de la desmovilización está la “Mano negra”, bajo el mando de alias Jhony, quien supuestamente es reinsertado, en límites con el Departamento del Cauca y la organización “Nueva Generación”, que se reinsertó y ahora sus integrantes regresaron como sicarios a sueldo. Estas nuevas organizaciones se estructuran como empresas del narcotráfico, cobran “impuestos” por la seguridad a los narcos y negocian con otros empresarios del narcotráfico.⁸⁴

A pesar de la situación de inseguridad que se presenta en las áreas rurales por el incremento de la presencia guerrillera y en las áreas urbanas por la presencia paramilitar, Nariño es un departamento expulsor y receptor de desplazados, en buena parte porque hay mayores oportunidades laborales y por otro lado, por ser lugar de tránsito para desplazarse hacia el Ecuador en busca de trabajo.

⁸² “La coca se ha convertido en una verdadera industria en regiones como el litoral pacífico de Nariño. Al darse cuenta de que la proximidad a las fronteras les permite utilizar rutas más cortas hasta la costa con menos riesgo de intercepción por parte de las autoridades, las AUC y las FARC han llegado a un modus operandi (una excepción en su relación por lo general mala) que permite que uno de los grupos controle las zonas de cultivo y que el otro controle el negocio de exportación. No se producen confrontaciones armadas siempre y cuando ninguno de los grupos rompa las reglas. Cualquier civil que no acepte este arreglo es considerado objetivo militar por uno u otro bando. Las poblaciones ecuatorianas cercanas, como San Lorenzo y más hacia el sur Esmeraldas, al igual que Lago Agrio en la provincia de Sucumbíos hacia el este, han presenciado asesinatos selectivos y un sicariato más generalizado.” En **Las fronteras de Colombia: el eslabón débil de la política de seguridad de Uribe**, Internacional Crisis Group –ICG-, Informe sobre América Latina No. 9, 23 de septiembre de 2004, Quito-Bruselas

⁸³ *Ibíd.*

⁸⁴ *Ibíd.*

La economía nariñense está sustentada en la agricultura, tanto de minifundio campesino andino como de plantaciones de palma de aceite en el litoral pacífico, pero tras la expansión de los cultivos de coca se redujo el área de cultivos lícitos, por la mayor rentabilidad de la coca. Muchas plantaciones de palma de aceite han sido aprovechadas, por imposición armada sobre los empresarios, para plantar extensos cultivos de coca bajo las palmas en la región pacífica del río Mira.

Aunque en Nariño no se habla de la existencia de carteles, pues los grandes traficantes vienen del Cauca y el Valle, han comenzado a verse los indicios del lavado de dinero en inversiones comerciales y finca raíz. Un ejemplo notable de la nueva afluencia de dinero se observa en Llorente, en la vía Pasto-Tumaco, que es un centro de acopio y de negocios, donde impera la ley del silencio, pues es una zona de control de paramilitares y narcotraficantes.

Una de las ventajas del narcotráfico en Nariño es la facilidad para abastecerse de gasolina. La gasolina es más barata porque entra por la planta de Yumbo para todo el departamento. El número de estaciones de gasolina ha aumentado a un ritmo superior a la demanda real, hasta llegar a 236 en 2005, y la policía sospecha que los narcotraficantes son los dueños de muchas bombas de gasolina. También está entrando gasolina de contrabando por aguas internacionales por La Esmeralda.⁸⁵

Otro de los aspectos importantes en la nueva economía nariñense son las casas de cambio, que se han multiplicado a raíz de la dolarización en el Ecuador y se sospecha que narcotraficantes son dueños de muchas de ellas. El gobierno ha estado haciendo esfuerzos frente al lavado de activos, pero en las ciudades fronterizas con Ecuador, con una economía dolarizada, el control se dificulta por la facilidad de transferir dinero a través de la frontera.

⁸⁵ *Ibíd.*

Desde Imbabura hasta Santo Domingo y Salinas –Ecuador– hay una clara inversión de dineros del narcotráfico en construcciones de viviendas, hoteles y centros comerciales. Así mismo, la inversión en negocios tradicionales ecuatorianos como las camaroneras ha sido atractiva para los nuevos ricos colombianos,⁸⁶

Del Ecuador se importa –y se contrabandea– gasolina, cemento y otra serie de insumos químicos con destino a los laboratorios de procesamiento de base y cristalizadores ubicados tanto en Nariño como en Putumayo. El tráfico es facilitado por la cantidad de rutas terrestres (La Puerta, Tambillo y Tayambí, entre otras), marítimas y fluviales que permiten el intercambio de armas y de drogas, con destino a Norteamérica a través de Tumaco. Se habla de las islas del archipiélago de Galápagos y de otros islotes más sobre la costa pacífica ecuatoriana como embarcaderos de droga.⁸⁷

La guerrilla de las FARC tiene presencia discreta en el Ecuador, se abastece en Lago Agrio y, según observadores locales, ha comprado tierras en lugares de paso de la droga. Conocedores en Puerto Asís afirman que las FARC ejercen alguna influencia política sobre los movimientos indígenas y campesinos para oponerse a la fumigación. El interés de la guerrilla es hacer de Ecuador un sitio de refugio y no de confrontación. Los guerrilleros pasan sin uniformes desde Nariño al

⁸⁶ “Las autoridades municipales, la policía y el ejército afirman constantemente que ni los cultivos de coca ni los de amapola son un problema en Ecuador. Sin embargo, funcionarios de agencias de desarrollo han detectado algunas hectáreas cerca de la frontera. delincuencia y criminalidad de la región, que muchos relacionan con el conflicto en Colombia. Además, los narcotraficantes están aprovechando el mercado dolarizado de Ecuador para lavar sus dineros. En los últimos meses se ha producido una bonanza de la construcción en la provincia fronteriza norteña de Esmeraldas, lo que hace pensar en un sorprendente incremento de la liquidez en una de las provincias más pobres de Ecuador.” En **Las fronteras de Colombia: el eslabón débil de la política de seguridad de Uribe**, Internacional Crisis Group –ICG-, Informe sobre América Latina No. 9, 23 de septiembre de 2004, Quito-Bruselas.

⁸⁷ . “En Nariño, que en la actualidad es la mayor región unitaria de producción de coca en Colombia --20 por ciento del total nacional en el 200389-- es posible acceder a varios puertos sin control entre Tumaco y Esmeraldas, en Ecuador, en cuestión de pocas horas desde las plantaciones principales. Este reducto de cultivos de coca y laboratorios se encuentra aislado de Pasto, la capital del departamento que queda más hacia el norte, y sólo está conectado por una carretera, controlada a lo largo de diferentes tramos por las FARC y las AUC”, En **Las fronteras de Colombia: el eslabón débil de la política de seguridad de Uribe**, Internacional Crisis Group –ICG-, Informe sobre América Latina No. 9, 23 de septiembre de 2004, Quito-Bruselas

Ecuador, situación diferente a la que se presenta en límites con Putumayo, donde el suelo ecuatoriano es zona de retaguardia estratégica de las FARC.

Eventualmente las autoridades ecuatorianas detienen y deportan miembros de las FARC, pero los entregan discretamente a la policía colombiana en el puesto de control fronterizo. La percepción que prevalece es que los controles al narcotráfico son muy débiles en territorio ecuatoriano y alta la corrupción al menudeo entre miembros del ejército, factores que explicarían la facilidad de desplazamiento de las guerrillas. Los ecuatorianos temen una expansión del conflicto colombiano a su país, lo que explica su aprehensión en tomar posición frente a la situación en Colombia. El conflicto, sin embargo, ya está en Ecuador, por la vía del narcotráfico, y tarde o temprano su gobierno deberá afrontar los cambios sociales y económicos que empieza a generar. Ecuador ha buscado mantenerse neutral frente al conflicto colombiano, pero no podrá serlo cuando reconozca la magnitud de su propio problema y su falta de preparación para afrontarlo. Por ahora, parece más fácil concebirlo como un problema importado, que se puede superar con notas de protesta diplomáticas.

Sobre ese mismo temor también se funda la posición del presidente Alfredo Palacios y su ministro de Relaciones Exteriores, Alfredo Parra Gil, sobre la reticencia a las fumigaciones con glifosato en las áreas fronterizas, por lo que propone una franja de exclusión de 10 kilómetros de la frontera, para evitar las repercusiones en la salud de los pobladores, de sus animales y de sus plantaciones.⁸⁸ La fumigación fue la política adoptada por Colombia y Ecuador deberá escoger entre las alternativas disponibles cuando los cultivos de coca y amapola se rieguen por su territorio. Los observadores prevén que Ecuador se va a llenar de coca por la dolarización y por la debilidad de los controles estatales.

⁸⁸ Agencia EFE "Canciller el Ecuador cuestiona el Plan Colombia por intervención de EEUU". Periódico El Deber en línea. Martes 6 de Septiembre de 2.005. Disponible en: <http://www.eldeber.com.bo/antecedentes/20050906/al7.html>

Nariño cuenta con una base militar (BAFIM), DAS, CTI, grupo CABAL del Ejército, Policía, entre otros, pero el incremento de Fuerza Pública está rezagado respecto del aumento de los índices de violencia. En el departamento está disparado el homicidio con armas de fuego por *vendettas* y sicariato. También tiene el mayor índice de suicidios del país. En Nariño, hasta octubre del 2.004 hubo 355 muertos, este año van 552. Semanalmente hay de 15 a 20 muertos, principalmente en Tumaco, Pasto e Ipiales.

2. Los problemas del narcotráfico en las fronteras terrestres

Por el conocimiento que se tiene del mercado mundial de las drogas puede preverse que, a medida que Colombia aumente la hostilidad frente al narcotráfico, los países vecinos verán desplazarse a sus territorios los cultivos, laboratorios, sistemas de transporte y organizaciones empresariales encargadas de reemplazar a los colombianos en el abastecimiento de la demanda internacional. Esta investigación recogió observaciones que señalan que este desplazamiento ha comenzado en territorios de Venezuela, Brasil, Perú y Ecuador.

Este análisis se centrará en cuatro áreas temáticas: primera, un análisis sobre los impactos del narcotráfico en las regiones fronterizas; segunda, una reflexión sobre los efectos destructivos del narcotráfico, que son la corrupción y la violencia; tercera, consideraciones sobre el narcotráfico y la política de seguridad democrática del gobierno; y cuarta, una reflexión final sobre la cooperación fronteriza con los países vecinos.

2.1. Los impactos regionales del narcotráfico

Las condiciones locales de cada región determinan la profundidad y extensión del impacto del narcotráfico sobre la vida social. En las fronteras terrestres visitadas se confirmó la tipología elaborada en la sección III. Se encontró que predominan

tres formas principales de organización social, que condicionan las consecuencias del desarrollo de la industria de drogas ilegales en esas zonas. Primero, hay regiones donde habitan minorías étnicas con territorios ancestrales, protegidos por la propiedad colectiva de los resguardos indígenas, como en Guajira, Vichada, Amazonas y Putumayo. Segundo, hay regiones de colonización campesina reciente, donde se está estructurando la tenencia de la tierra y se está definiendo la relación con el mercado, tanto interno como externo, como Norte de Santander, Arauca, Vichada y Putumayo. Tercero, hay regiones especializadas en el comercio fronterizo, con economías complementarias que evolucionan según los flujos de intercambios con el país vecino, como Guajira (Maicao), Norte de Santander (Cúcuta) y Nariño (Ipiales).

El impacto más importante sobre las comunidades indígenas es la presión del narcotráfico para usar los territorios y la mano de obra disponible para las actividades de producción, procesamiento y transporte de las drogas. En Guajira hay una presión grande de los actores armados, guerrillas y paramilitares, para desplazar indígenas de las estribaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta y usar sus tierras fértiles para cultivos de coca. También hay una presión de paramilitares y agentes del narcotráfico para usar los territorios y puertos de la Alta Guajira y subordinar a los Wayuu en tareas de encaletamiento y transporte de drogas. En Vichada la presión colonizadora inducida por el narcotráfico amenaza los territorios indígenas, cuyas comunidades son particularmente vulnerables debido a que, pese a su extensión, muchas reservas son insuficientes para sostener las comunidades cuando los cultivos de coca han agotado la fertilidad de las áreas de matas de monte donde los indígenas practican la agricultura de subsistencia. En Amazonas la ampliación de áreas de cultivo de coca en territorios indígenas expone a las comunidades a la represión de las autoridades, pese a que los indígenas solo obtienen beneficios muy marginales del cultivo. En Putumayo el narcotráfico subsidió la presión colonizadora sobre territorios indígenas, acelerando su desplazamiento.

El impacto del narcotráfico sobre la colonización consiste en que los altos ingresos del negocio de las drogas generados por la ilegalidad son capaces de financiar asentamientos humanos, abastecidos por vía aérea o fluvial, muy distantes de las áreas cuya colonización estaría vinculada al mercado interno, con lo cual se alteran las pautas lógicas de expansión de la frontera agropecuaria más allá de lo que el Estado puede proveer con infraestructura, servicios y seguridad. Al expandir artificialmente la frontera sobre los bosques amazónicos, andinos y pacíficos, el narcotráfico agrava la destrucción ambiental y aumenta la ineficiencia en el uso del suelo, pues termina extendiendo la ganadería sobre suelos que se tornan improductivos al perder la cobertura vegetal.

Las colonizaciones coqueras son altamente dependientes de la suerte de la industria ilegal y por tanto son propensas a sufrir fuertes recesiones locales cuando el Estado combate el tráfico y los cultivos. Así como los altos ingresos atraen mano de obra, su caída la expulsan cuando el negocio decae. La distancia del mercado nacional legal eleva los precios de bienes de subsistencia, erosionando los nominalmente altos ingresos ilegales de los cultivadores. Por esa razón no puede lograrse una capitalización de ganancias a favor de los pequeños cultivadores, sino a lo sumo una economía de subsistencia y despilfarro transitorios, incapaz de generar crecimiento sostenido.

Los altos ingresos de la actividad ilegal explican el fracaso de las cuantiosas inversiones que se han realizado para buscar un desarrollo alternativo con productos distintos a la coca en la región amazónica. El hecho es que en esas zonas solamente es posible tener actividades económicas rentables más allá del nivel de subsistencia si son ilegales. Al exigirle a los programas de desarrollo alternativo competir con los cultivos ilegales, implícitamente se acepta que los cultivadores tienen derecho a obtener ingresos del tamaño de los ilegales. En otras palabras, se acepta el ingreso ilegal como norma. Por eso es necesario pensar el problema en términos de integración territorial y usos adecuados del espacio, no sólo geográfico sino económico y social. Un asentamiento humano

muy distante del mercado, ocupado exclusivamente en producir coca y base de cocaína, no puede ser erradicado con productos alternativos, sino con una relocalización de la población hacia territorios integrados al circuito económico legal, donde existe un amplio repertorio de posibilidades productivas. Devolver al bosque los espacios donde se erradiquen los cultivos ilícitos y reasentar a la población en los espacios donde el país ha acumulado una oferta de infraestructura y servicios es resolver al mismo tiempo el daño ambiental y la causa social que motivó las corrientes de colonización campesina que terminaron siendo campos de cultivo ilícito.

En las regiones de comercio fronterizo, el narcotráfico contamina los intercambios de mercancías legales y dificulta los procesos de integración económica con los países vecinos. Las rutas, vehículos, agentes e instalaciones del comercio legal son utilizadas para camuflar embarques de drogas, con lo cual se obliga a las autoridades a establecer controles y restricciones que pesan como nuevos costos de transacción sobre el comercio legal. Al usar viajeros internacionales para el envío de drogas, el narcotráfico induce mayores restricciones a la movilidad de la población y promueve tratamientos hostiles de autoridades extranjeras contra grupos humanos por su procedencia y nacionalidad. En otras palabras, la existencia del narcotráfico aumenta los costos de las actividades económicas lícitas y se convierte en el equivalente a un impuesto de la ilegalidad sobre la legalidad.

Todas las áreas de cultivos ilícitos situadas cerca de las fronteras comparten con los países vecinos los ecosistemas y los contextos sociales que facilitaron su expansión en Colombia. En todas ellas hay bosque primario, campesinado pobre, crimen organizado, debilidad del control estatal e inexperiencia con las consecuencias destructivas del narcotráfico y la difusión del enriquecimiento ilícito. Casi todas las regiones fronterizas de los vecinos han sido usadas como santuario por las guerrillas para eludir confrontaciones con el ejército colombiano. Es claro que los gobiernos vecinos preferirían que esto no fuera así, pero no reconocer

este hecho es semejante a negar que un terremoto tiene consecuencias importantes en los países vecinos.

En esta investigación se reportaron tres áreas donde claramente se han expandido los cultivos y laboratorios más allá de las fronteras colombianas. Primero, en la región oriental de la Serranía de Perijá, en Venezuela, donde hay cultivos de amapola en las zonas altas y de coca en las bajas. Segundo, en el lado brasileño del Amazonas, donde se reporta la existencia de laboratorios de cristalización. Tercero, en la ribera sur del río Putumayo, en territorios de Perú y Ecuador, donde hay cultivos de coca y laboratorios.

En cuanto a la inversión de ganancias del narcotráfico en países vecinos, la investigación permitió destacar los casos de Venezuela y Ecuador como los más avanzados, donde hay compra de tierras y de inmuebles urbanos, inversión en empresas y plantaciones agrícolas, turismo, comercio y casas de cambio. En Ecuador la adopción del dólar estadounidense como moneda nacional facilitó el proceso de lavado de dinero puesto que todas las transacciones legales se realizan en la moneda que los narcotraficantes reciben en el pago de sus exportaciones.

2.2. Efectos destructivos del narcotráfico

El narcotráfico, como industria ilegal de alto riesgo y alta rentabilidad, se localiza en regiones cuyas instituciones y estructura sean apropiadas al desarrollo de actividades económicas ilegales, pero una vez establecido, es capaz de crear o adaptar las condiciones sociales, económicas, institucionales y políticas de cada región a sus necesidades de operación. Al hacerlo, también cambia las condiciones en las que se desarrolla la vida regional y los intercambios de la región con la sociedad nacional y global. Como es un negocio ilegal, sus agentes deben usar instrumentos distintos a la ley y la justicia para asegurar el cumplimiento de los acuerdos y garantizar su seguridad.

La corrupción y la violencia son, en principio, los dos recursos adaptativos de los agentes del narcotráfico para neutralizar a las autoridades y proteger los beneficios del negocio. La justicia y la legitimidad de su acción son los recursos del Estado para reducir los daños sociales del narcotráfico y corregir las distorsiones acumuladas por la ilegalidad. La corrupción enriquece ilegalmente a personas con autoridad y premia la inacción estatal, mientras la violencia permite que organizaciones para-estatales sustituyan al Estado e instaure una forma mafiosa y predatoria de organización política, que destruye para todos el imperio del derecho en la vida económica y social.

La expresión mayor de la corrupción es el surgimiento rápido de pequeñas minorías que concentran la propiedad y el capital de inversión, y el extremo de la organización de la violencia es la operación de ejércitos privados, que dominan territorios allanados para el funcionamiento de los negocios del narcotráfico e imponen la extorsión, la intimidación y la arbitrariedad sobre la población. En las condiciones de Colombia, con organizaciones insurgentes desde hace cuarenta años, el narcotráfico evolucionó hacia un modelo en el cual la producción y procesamiento de drogas tienden a concentrarse en territorios dominados militarmente por organizaciones de violencia, tanto de origen guerrillero como paramilitar, que proveen drogas a empresas especializadas en la exportación y distribución al exterior, que a su vez conforman alianzas y redes con empresas de otros países involucrados en el tránsito y el consumo.

Así se ha llegado a la situación en la cual las organizaciones de violencia capturan una parte creciente de las ganancias del narcotráfico para financiar su propia reproducción, y el Estado ha sido obligado a concebir una política militar contra el narcotráfico, definido como un enemigo con capacidad defensiva y agresiva con fuerza armada propia. El reconocimiento de esta realidad es uno de los fundamentos de la política de seguridad democrática, con su doble aplicación

práctica de contención militar de las guerrillas y desmovilización de los paramilitares.

Para el Estado, el problema ocasionado por la corrupción es la ilegitimidad de los derechos de propiedad, que erosiona uno de los fundamentos sobre los que se levanta la organización de la sociedad. El problema de la violencia organizada es que destruye el poder de la sociedad para actuar sobre sí misma y lo reemplaza por la tiranía de la fuerza, usada como recurso para beneficio privado. La misma existencia del Estado como organización social está amenazada en regiones dominadas por la fuerza en manos privadas, tanto de guerrillas como de paramilitares.

2.3. El narcotráfico y la política de seguridad

La evolución del narcotráfico en Colombia condujo, finalmente, a una estructura del negocio en la cual las guerrillas tienden a controlar los campos de cultivo y la producción de base, los grupos paramilitares tienden a controlar los laboratorios de cristalización y las empresas narcotraficantes especializadas controlan las rutas y la distribución mayorista a redes del exterior. El premio que el negocio paga al control territorial convierte a sus agentes en captadores de rentas, cuya suerte está parcialmente ligada al negocio del narcotráfico. A su vez, la defensa armada del negocio de las drogas eleva el costo de combatirlo por el Estado y disminuye sus posibilidades de éxito.⁸⁹

⁸⁹ “El narcotráfico tiene tres requisitos básicos. Requiere un poder coercitivo para asegurar la protección de sus operaciones. Requiere además una conexión con uno de los grupos armados que se han dividido entre sí los cultivos de coca, y cada vez más las rutas: en Colombia ya no es posible ser un narcotraficante urbano "a la antigua", como lo fuera en su momento José Santacruz, por ejemplo; tiene que estar "engranado" con uno -o varios- de los grupos armados, es decir tiene que estar engranado en el conflicto. Y requiere finalmente un entorno institucional favorable, que es lo mismo que decir que tiene que corromper a todos a su alrededor.” Fundación Ideas para la Paz, “La tercera generación”, en Siguiendo el conflicto: hechos y análisis de la semana, Número 25. Agosto 12 de 2005

La inserción de guerrillas y paramilitares en el negocio del narcotráfico cambió las condiciones del conflicto armado. Como las guerrillas ejercían influencia en regiones de colonización, se convirtieron en aparatos armados para regular y obtener rentas en las áreas de cultivos ilícitos. Como los paramilitares coparon las regiones guerrilleras y controlaron las mallas urbanas y las vías de comunicación, se transformaron en aparatos de seguridad de los laboratorios y rutas del narcotráfico. Como el Estado destruyó en los años noventa los grandes carteles que desarrollaron una red vertical del negocio relativamente integrada, la nueva generación de narcotraficantes se fragmentó en muchas pequeñas empresas especializadas, que acopian la cocaína y la heroína producidas bajo el control de guerrillas y paramilitares y las venden al exterior.

Como la materia prima de los laboratorios de cristalización proviene de las cocinas de los cultivadores campesinos y los dueños de plantaciones, la necesidad de contar con un flujo constante de drogas ha inducido a guerrillas y paramilitares a interrumpir las hostilidades recíprocas y sustituirlas por una división de territorios de influencia, articulados a las mismas empresas narcotraficantes. En todas las regiones visitadas en este estudio, con excepción de Amazonas, donde no hay presencia paramilitar, y Putumayo, donde permanece un conflicto entre las FARC y grupos de desmovilizados del paramilitarismo que se reagruparon para rentar del narcotráfico, se encontró que no había confrontaciones entre guerrillas y paramilitares, sino una clara delimitación de zonas de influencia.

Como en toda situación donde surgen mafias producto del crimen organizado, el problema para la sociedad y el Estado es cómo se regularizan y legalizan las nuevas condiciones económicas y políticas producidas por el narcotráfico sin que la solución legitime al mismo crimen organizado como expediente para enriquecerse y adquirir poder en la sociedad. Esas nuevas condiciones se resumen en un pequeño grupo humano que concentra riqueza y poder armado, y que interviene en el curso del conflicto canalizando recursos para financiar a los

dos adversarios. La propuesta implícita en la negociación de San José de Ralito es la de hacer un corte de cuentas, para asimilar a la sociedad esa elite mafiosa armada con un sometimiento blando a la justicia, a condición de abandonar el negocio de las drogas y desmovilizar los grupos armados que ejercen control territorial.

En consecuencia, la política de seguridad democrática del gobierno del presidente Álvaro Uribe busca lograr dos objetivos centrales: contener y derrotar militarmente a las guerrillas, para negociar su desmovilización, por una parte, y desmovilizar a los paramilitares, por otra, para recuperar el monopolio de la contrainsurgencia. Y un objetivo complementario: facilitar la eliminación del narcotráfico en el país, a medida que se desactivan sus organizaciones armadas territoriales y se avanza en la erradicación de cultivos ilícitos.

Los términos de la oferta de desmovilización y el compromiso de reinserción a la sociedad para los desmovilizados implican que la gran mayoría de los miembros rasos de grupos paramilitares serán amnistiados y los jefes se someterán a la justicia bajo los términos de la reciente ley de justicia y paz. La cortedad de los términos de investigación judicial y la insuficiencia del acopio de pruebas por la justicia parecen ser estrategias para asegurar un amplio margen de impunidad para quienes contribuyan a la paz, y es un buen seguro para impedir que la investigación se extienda a los funcionarios y civiles que colaboraron con los paramilitares.

El gobierno ha sido explícito en comprometerse a no extraditar a quienes cumplan sus compromisos en la desmovilización de combatientes, y la ley de justicia y paz equivale a un sometimiento pactado a la justicia, con penas reducidas y beneficios legales. Implícito en el acuerdo de desmovilización es el abandono de actividades relacionadas con el narcotráfico, pues la reincidencia haría perder todos los beneficios y podría terminar en la extradición de los responsables. El temor a la extradición a los Estados Unidos es la principal motivación para inducir a los

narcotraficantes con grupos armados a acogerse a la negociación en la mesa de San José de Ralito, en Córdoba. Hasta Febrero de 2006 se habían desmovilizado un poco más de 21.300 paramilitares, y otros lo harían en los próximos meses, al ampliarse el plazo inicial del 31 de diciembre de 2005.

La no extradición de grandes narcotraficantes es una decisión política que pondera los costos internacionales, especialmente con Estados Unidos, y los beneficios para la resolución del conflicto interno colombiano. Equivale a reconocer que la dinámica del conflicto armado, al fundirse con la dinámica del narcotráfico, produjo una generación de grandes narcotraficantes armados con ejércitos privados, cuya contribución a la seguridad de las regiones mediante la imposición del terror y la justicia privada, contó con la colaboración de sectores de las élites locales y de funcionarios civiles y armados del Estado, y por lo tanto tuvo el carácter de lucha política.

Esa alianza de seguridad entre el Estado y las elites regionales, legales e ilegales, que el régimen político toleró durante veinticinco años, debería llegar a su fin con la desmovilización pactada en San José de Ralito. Eso significa que debe terminar la ambivalencia que caracterizó hasta ahora la posición de la fuerza pública frente a los grupos paramilitares y que, en adelante, sólo deberá contar su carácter de ilegales para legitimar una política de represión y sometimiento a la ley. En la medida que esta negociación tenga éxito, la desmovilización pactada de grupos paramilitares será el final de la alianza antisubversiva en la que participaron tantos narcotraficantes, desde Gonzalo Rodríguez Gacha hasta Don Berna. Eso implica que en lo sucesivo los agentes del narcotráfico pierden el reconocimiento implícito de ser defensores armados de la sociedad para recobrar el estatus de delincuencia organizada.

La desmovilización, sin embargo, enfrenta numerosos problemas, algunos provenientes de la constitución interna de los grupos y otros del entorno en el que ocurre. En primer lugar, el problema de la seguridad de los desmovilizados y de

sus regiones de influencia contra la posible recuperación de territorios por parte de las guerrillas. En segundo lugar, la más que probable sustitución de los actuales paramilitares-narcotraficantes, cuando abandonen el negocio, por una nueva generación de narcotraficantes, que buscarán proveerse de seguridad privada mediante el reclutamiento de desmovilizados con experiencia militar para conformar una nueva generación de ejércitos privados. A ese resultado contribuye el hecho de que la negociación se realice con la cúpula de mando de los paramilitares, sin contar con el consentimiento y los intereses de los mandos medios y de las tropas. Esta investigación recogió testimonios sobre la reconfiguración de estructuras paramilitares en Norte de Santander, Vichada, Putumayo y Nariño, con los restos de grupos desmovilizados.

El gobierno, al abrir la puerta de la negociación con plazo definido, también está enviando las señales de lo que serán las políticas complementarias aplicables a quienes no cumplan los compromisos adquiridos. Sólo una renovada y eficaz política contra el narcotráfico que subsistirá luego de la desmovilización de los paramilitares es capaz de dar legitimidad a la negociación y capitalizar los beneficios de distensión del conflicto armado.

En primer lugar, la lógica de la negociación implica que deberán continuar los combates contra los grupos paramilitares que no se vinculen a la negociación, o que surjan como nuevos aparatos de seguridad privada, y se deberá intensificar las capturas de narcotraficantes con fines de extradición, para desactivar por completo a los agentes armados del narcotráfico. Continuarán aumentando los esfuerzos de interdicción de drogas, que según la policía llegaron el año 2004 a la incautación de 168 toneladas de cocaína, de las 400 que puede producir el país con las 80.000 hectáreas de cultivos que existen. Continuará intensificándose la fumigación y erradicación manual de cultivos de coca y amapola, no sólo porque satisface las expectativas del apoyo de los Estados Unidos, sino porque debilita la base financiera de las guerrillas.

Por ser empresas lucrativas que vinculan la ilegalidad y la violencia, tanto las organizaciones de narcotraficantes como los grupos paramilitares tienen implícito el mecanismo de relevo de líderes con la ambición de los mandos medios de reemplazarlos en los puestos de comando y acumulación de capital. Por esa razón, la única estrategia posible del Estado para enfrentar la nueva generación de paramilitares y narcotraficantes será la de elevar sustancialmente los costos y riesgos de la ilegalidad y el empleo privado de la violencia, para impedir su consolidación como aparatos de poder armado, gracias al esfuerzo sostenido de fortalecimiento y profesionalización de la fuerza pública y de la justicia. La lucha contra el narcotráfico será más fácil cuando los jefes del negocio no puedan contar con ejércitos privados tolerados por la sociedad y el Estado.

Colombia enfrenta un dilema que no ha podido resolver. El costo de ejercer la soberanía efectiva sobre una gran parte del territorio es muy alto y ese territorio no es rentable para la economía legal, por lo que la elite política y económica no tiene incentivos para tener una presencia fuerte pero costosa en esas zonas. El vacío de poder que genera la falta del ejercicio de la soberanía no es grave cuando no hay población en esas regiones, pero cuando ellas reciben migraciones, especialmente de personas desplazadas por movimientos violentos, cuya lealtad al gobierno central es muy baja o inexistente, dicho vacío lleva al desarrollo de estructuras para-estatales de derecha o izquierda. Infortunadamente, para estas estructuras el control de esas regiones sí es rentable puesto que allí las actividades ilegales producen altos réditos. El punto es que mientras el estado no puede financiarse a partir de la industria de drogas ilegales, el para-estado sí lo puede hacer.

La “preferencia revelada” por la corriente dominante de la sociedad colombiana muestra que ésta no reconoce o acepta la situación descrita en el párrafo anterior, puesto que enfrentarla implicaría realmente poner al país en pie de guerra, aumentar impuestos sustancialmente y aumentar considerablemente los recursos dedicados a establecer la soberanía en las áreas económicamente improductivas.

A diferencia de muchos otros países, Colombia realmente no ha enfrentado un enemigo o guerras externas importantes que facilitan la movilización de la sociedad en defensa de la soberanía. En Colombia el conflicto es interno y su solución requiere cambios sustanciales en el comportamiento de su elite y en sus instituciones. Esto hace que sea mucho más difícil generar un amplio apoyo para enfrentarlo. Por eso, hasta ahora el establecimiento ha tendido a definir el problema del narcotráfico, las guerrillas y los paramilitares como “calamidades” que agobian a la sociedad colombiana. Es como si esas organizaciones no estuvieran formadas por colombianos socializados en el país. En otras palabras, se piensa como si estas “calamidades” no hubieran sido producto de la historia e instituciones colombianas. Por consiguiente, el establecimiento no tiene por qué cambiar sus comportamientos y la solución a estas realidades radica en aplicar fuerza contra “narco-terroristas”, “bandidos”, etc. Infortunadamente, el ambiente actual no es propicio para hacer preguntas difíciles como ¿hasta qué punto la fuerza puede dar resultados durables, que no se neutralicen con mayor fuerza de los adversarios? y ¿qué reformas se requieren para hacer una Colombia más justa, solidaria, equitativa y comunitaria?

La política de seguridad, en otras palabras, cambia la situación relativa de los actores armados del conflicto, pero deja intactas las fuerzas que impulsan la expansión del narcotráfico y las estructuras que generan para-estados en las regiones periféricas de las fronteras. Sólo una nueva relación del Estado con el territorio fronterizo, que racionalice la distribución de la población de acuerdo con el uso económico de las regiones incorporadas al mercado, podría ser determinante para debilitar la dinámica de los cultivos ilícitos y el narcotráfico.

2.4. Las relaciones de cooperación fronteriza con los vecinos.

La capacidad de un país para resistir la infiltración del narcotráfico en su territorio depende de su cultura (actitudes, creencias y valores) de la legalidad y la fortaleza de sus instituciones. El nivel de deshonestidad existente en un país es el

punto de partida de la expansión del narcotráfico, porque la corrupción es la manera mafiosa de crear espacios de confianza fundados en el interés recíproco de enriquecimiento, y la violencia el sistema alternativo de justicia para asegurar los acuerdos y respaldar los negocios.

Venezuela es un país con un estado central rico, rentista del petróleo, que atraviesa una crisis política profunda, provocada por el fracaso de los partidos históricos para sembrar bien y distribuir equitativamente la bonanza petrolera y que han sido reemplazados por lo que el gobierno del presidente Hugo Chávez denomina la “revolución Bolivariana”, que se acerca a una variante del populismo latinoamericano, dirigida por un caudillo que distribuye beneficios sociales para acumular adhesión popular. En el frente externo, el país adoptó una estrategia desafiante de la influencia estadounidense, fundada en el poder negociador del petróleo. Rechazó las actuaciones de la DEA y renegoció las condiciones de su operación en territorio venezolano.

El gobierno venezolano concibe el Plan Colombia como una intervención militar de los Estados Unidos con impactos adversos para su gobierno y su país, y percibe la alianza con el gobierno de Colombia como una tenaza que amenaza los intereses estratégicos de Venezuela. Por esta razón, Colombia no debe esperar mucha cooperación militar y policial de Venezuela, excepto la que obedezca al interés interno del gobierno venezolano para impedir que prospere el narcotráfico en su territorio.

Ese interés ya se ha manifestado en la interceptación de grandes cargamentos de cocaína, de hasta tres toneladas, y en los esfuerzos para examinar el origen de los capitales de inversionistas colombianos en Maracaibo y San Cristóbal. El gobierno venezolano es consciente de la expansión de cultivos de amapola en la parte alta de la Serranía de Perijá. Sin embargo, la penetración inicial del narcotráfico en Venezuela, como país de tránsito, se ha facilitado por la falta de preparación de su Guardia Nacional y su PTJ para enfrentar el embate de la corrupción al menudeo,

que caracteriza la primera fase de ambientación de los negocios del narcotráfico. Según todas las personas entrevistadas, la facilidad que encuentran los narcotraficantes para pasar cargamentos de drogas por los puestos de control fronterizo y dentro de territorio venezolano corresponde a la ambición de dinero fácil de sus autoridades locales.

Dada la fortaleza interna de la maquinaria del Estado venezolano desarrollada por el presidente Chávez, podría esperarse que el narcotráfico en ese país no llegue a los niveles de penetración e influencia a los que llegó en Colombia, afectada por circunstancias más adversas como el conflicto armado. En Venezuela, por lo menos, el Estado tiene la ventaja de estar luchando contra organizaciones de crimen organizado incipientes y no contra empresas armadas del narcotráfico, como sucede en Colombia. Un factor que facilita el narcotráfico desde Venezuela hacia Europa es la mayor migración de europeos residenciados desde hace varias generaciones en el país, que conservan lazos familiares en el viejo continente.

El otro caso preocupante es Ecuador. Su aparato estatal está afectado por una profunda crisis política de casi una década de duración, con relevo rápido de gobernantes depuestos mediante golpes de estado y protestas populares. La crisis económica ha llegado hasta la pérdida de la soberanía monetaria y la dolarización de la economía. Su capacidad fiscal para escalar el tamaño de su fuerza pública y su justicia hasta el nivel del reto planteado por el narcotráfico es a todas luces insuficiente.

Su región amazónica y su región pacífica colindantes con Colombia han sido penetradas profundamente por las redes de transporte de drogas y las guerrillas han constituido un santuario de refugio e influencia social. Los narcotraficantes colombianos han invertido extensamente en ese país y organizaciones incipientes de ecuatorianos han comenzado a incursionar en el tráfico, para capturar las rentas del valor agregado del uso de su territorio.

Todas las circunstancias anteriores hacen de Ecuador un país vulnerable a una gran expansión de cultivos ilícitos y laboratorios en su territorio en los próximos años, con surgimiento de organizaciones propias para capitalizar las ganancias y con capacidad de influencia sobre los movimientos indígenas y campesinos que han ganado protagonismo político en los últimos años. Para complicar el cuadro, un pequeño grupo guerrillero, descendiente de la guerrilla ¡Alfaro Vive Carajo!, puede crecer y ejercer dominios territoriales si se inserta en la economía del narcotráfico, siguiendo el modelo de las FARC.

Ecuador está pagando las consecuencias del éxito relativo de Colombia en su lucha contra el narcotráfico, porque es el vecino que más inmediatamente recibe el desplazamiento de la infraestructura del negocio. Colombia tiene una responsabilidad en cooperar con Ecuador, y buscar que Estados Unidos aumente su cooperación con el vecino, para que sus aparatos policiales y judiciales tengan mejores oportunidades para contener los daños que causa el predominio de organizaciones criminales en la sociedad.

Especialmente delicado es el manejo del problema de la presencia de las FARC en Ecuador. Hasta ahora parece haber un pacto implícito de no agresión entre esa guerrilla y el gobierno ecuatoriano, en cuanto la guerrilla no realiza acciones militares y conserva un bajo perfil, por su interés de mantener su santuario sin conflicto armado, y el gobierno evita usar la fuerza para intervenir en lo que considera un conflicto ajeno, como desearían las fuerzas armadas colombianas de un país aliado. Esta situación es de equilibrio inestable y podría concluir si se desata una escalada de acción y reacción de las guerrillas y las autoridades ecuatorianas.

Perú comienza a experimentar un nuevo auge de cultivos de coca en su región amazónica y los grandes valles andinos que descienden a ella, y su frontera con Colombia, para usar la ruta del Amazonas, se está llenando de cultivos. En ese país existe una amplia base indígena andina consumidora de hoja de coca y una

colonización amazónica que fracasa, como en Colombia, por la distancia al mercado, y para cuyos agentes la coca es el rescate económico. El país cuenta con una amplia experiencia en la producción y la refinación de la cocaína y sus organizaciones empresariales ya son capaces, en alianza con redes internacionales, de llegar a los mercados finales.

Perú, como Ecuador, atraviesa una crisis estatal profunda, por la falta de un régimen político viable posterior a la salida de Alberto Fujimori, quien, a su vez, concentró arbitrariamente el poder y liquidó la vitalidad de los partidos políticos. Durante ese gobierno los vínculos entre el aparato militar y los sistemas de seguridad con el narcotráfico se estrecharon bajo el liderazgo del hombre fuerte del gobierno, Vladimiro Montesinos. Sus instituciones de policía no tienen la capacidad y el nivel de profesionalismo necesarios para contener el narcotráfico y no son obstáculo para la producción y distribución de drogas, por la facilidad con la que aceptan sobornos.

El Perú está experimentando un fortalecimiento de los movimientos de campesinos que buscan “revalorar” la hoja de la coca como símbolo de las explotadas culturas indígenas. Aunque estos no han llegado a tener el poder de los movimientos bolivianos que llevaron al poder a Evo Morales, si pueden fortalecerse en el futuro. El ex-militar de origen indígena Ollanta Humala es hoy un fuerte candidato a la presidencia que aglutina los movimientos de resistencia campesina.

Estas condiciones debilitan seriamente las posibilidades de cooperación con Colombia en la lucha contra el narcotráfico, pues las autoridades fronterizas colombianas no tienen la confianza mínima necesaria para adelantar operaciones concertadas de intercepción y control del narcotráfico.

Brasil, finalmente, comienza el proceso de inserción del narcotráfico en el ámbito internacional con la instalación de laboratorios ribereños del Amazonas y con

laboratorios móviles camuflados en barcos que lo recorren, en rutas que pasan por Manaus y Belén de Pará para salir al Atlántico. Es país de tránsito consolidado, con rutas que del Amazonas pasan a Río de Janeiro y Sao Pablo, Surinam, Guayana y con destino a Europa, especialmente Holanda.

El Brasileño es un estado que por razones de estrategia tiene una política expresa de fortalecimiento de su presencia en las fronteras desde hace décadas, con cubrimiento militar y policial superiores a los de Colombia, Perú y Venezuela en sus regiones amazónicas. En las barriadas de sus grandes ciudades, sin embargo, el narcotráfico encuentra una abundante oferta de mano de obra criminal, que ya está elevando los índices de violencia. En las “fabelas” de sus grandes ciudades las mafias locales tienen un gran poder, semejante al que tenían los grupos armados en las comunas nororientales de Medellín hace unos años. Brasil se ha convertido en un consumidor serio de drogas y es probable que hoy sea el segundo consumidor mundial de cocaína. No hay duda que una parte importante parte de la que circula por su territorio es retenida para abastecer su mercado interno.⁹⁰

La cooperación con las autoridades fronterizas brasileñas es bastante fluida en intercambios de información, que permiten tener algún éxito en intercepción fluvial

⁹⁰ “In Brazil, where organized crime has come to control the gun and drug trade, there is an increasing demand for both products. In Rio de Janeiro alone, analysts who study violence in the shantytowns estimated in 2003 that there were at least 10,000 armed gang members. This number has likely grown significantly.

Organized crime actors in Brazil purchase weapons from providers in the tri-border area joining Brazil, Paraguay, and Argentina. There are so many black market weapons in Brazil that organized crime has been trading weapons for pure cocaine with the FARC since 2000. Some claim this barter system originated in a deal between the Red Command crime faction in Rio de Janeiro, and members of the FARC in southeastern Colombia.

Recent studies conclude that there are some four million illegal weapons in the hands of organized crime in Brazil. Brazil’s demand for cocaine has grown, placing the country at the top of the list of worldwide cocaine markets, behind only the US. Both the CIA and Interpol agree that up to 60 per cent of the cocaine that enters Brazil stays in Brazil, while the rest lands in Europe, Africa, and in some cases the Middle East and Asia.”

En Sam Logan, **Guns, Cocaine: One Market Out Of Control**, International Relations and Security (Zurich), <http://www.isn.ethz.ch/news/sw/details.cfm?id>

y aérea del narcotráfico. Su mayor presencia territorial, sin embargo, no es una seria amenaza para el narcotráfico, porque el costo de escalar los controles policiales y administrativos es muy grande en comparación con la reducida actividad económica de su región amazónica.

3. El lavado de activos en las fronteras

Las fronteras juegan un papel importante en el proceso de lavado de activos en el país. Sin embargo, el análisis de este fenómeno no es fácil. En el ámbito internacional la definición de lavado de activos es simple: un proceso por el cual se disfraza el origen dineros y activos obtenidos ilícitamente para que parezcan legítimos. En la práctica los estudios al respecto han enfatizado el lavado que tiene lugar en los paraísos fiscales y financieros, especialmente en los centros *off-shore*. Esta literatura describe el proceso de lavado de activos en tres etapas. La primera es la colocación del dinero en efectivo en el sistema financiero. La segunda consiste en esconder y disfrazar el origen de los fondos ilícitos por medio de una serie de transacciones electrónicas que transfieren fondos entre diversas cuentas anónimas localizadas en diferentes paraísos financieros hasta que finalmente, en la tercera etapa, el capital se invierte en actividades lícitas.

En el caso de Colombia y sus fronteras los procesos descritos no son muy comunes. De hecho, una gran parte del lavado tiene lugar en el sector real, no en el monetario. El contrabando de diversos bienes hace parte del proceso de lavado en el sector real. Los bienes importados de contrabando se venden en los mercados nacionales y los ingresos obtenidos se invierten fácilmente en finca raíz y otros activos. Muchas veces los importadores de contrabando también importan legalmente para así protegerse legalmente en caso de confiscación.

El proceso de lavado de dineros del narcotráfico colombiano requiere una serie de pasos. Primero, los ingresos grandes se generan en el exterior. Esto requiere transferirlos a Colombia. Segundo, esos ingresos deben ser convertidos a pesos.

Tercero, deben ser utilizados dentro de la economía colombiana, bien sea en consumo o en inversión. La inversión en Colombia está limitada por el tamaño de los mercados nacionales y las estructuras de propiedad y producción del país. Por ejemplo, la bolsa de valores, aunque ha crecido en años recientes, es muy pequeña y muchas de las empresas tienen estructuras cerradas de propiedad. De hecho, muchas son empresas familiares, lo que dificulta la inversión de parte de extraños. Por eso, no es sorprendente que la mayor inversión ilícita haya tenido lugar en finca raíz urbana y rural.

Cuando los ingresos ilegales se gastan en bienes y servicios de consumo no durable, no pueden confiscarse. Por eso quienes tienen altos ingresos ilegales tienden a tener niveles de consumo muy altos, aunque estos pueden permitir la identificación de gastos sospechosos.

La definición amplia de lavado en muchas ocasiones tampoco ha sido relevante para entender los fenómenos que ocurren en las fronteras colombianas. Esa definición equipara legalidad con legitimidad. Sin embargo, en una sociedad estratificada, con un gobierno central que no ha ejercido de manera efectiva la soberanía en amplias zonas del territorio, incluyendo las fronteras, la legalidad no coincide con la legitimidad.⁹¹ En Colombia las normas legales no tienen el respeto generalizado de la sociedad y en cada comunidad existen normas sociales que muchas veces difieren de las legales. De hecho en las sociedades étnicamente diversas y mezcladas, donde una cultura dominante ha sido impuesta a la fuerza sobre grandes segmentos de la población, hay muchas acciones consideradas ilegales pero legítimas dentro de amplios grupos sociales. Estas tienen la aprobación de costumbres y valores de la sociedad y algunos de sus subgrupos, pero son reprobados por las leyes formales.⁹²

⁹¹ Francisco Thoumi "Legitimidad, lavado de activos y divisas, drogas ilegales y corrupción en Colombia", en *Ensayo y error*. Vol. 1, No. 1, noviembre, 1996.

⁹² Thoumi 2002., *op cit* p, 200.

Un ejemplo clásico de lo anterior han sido las marchas populares en la Guajira que han exigido el “derecho” al contrabando, es decir, a violar la ley. Además, en esa región el estado ha permitido el tráfico de gasolina y otros productos en pequeña escala, contribuyendo a socavar el imperio de la ley.

La noción de lavado presenta otros problemas en cuanto a nivel abstracto y en términos económicos, el concepto se aplica a todos los capitales acumulados ilícitamente. En el ámbito jurídico eso no es cierto. En efecto, la legislación sobre lavado se origina en la convención de drogas de las Naciones Unidas de 1988 la cual buscó atacar el narcotráfico. Legalmente el lavado como delito se tipificó inicialmente para los capitales acumulados en el narcotráfico. Este concepto se ha ido ampliando en Colombia hasta incluir los dineros obtenidos por medio de secuestros, extorsiones y corrupción.⁹³ Sin embargo, Colombia posee una de las legislaciones más elaboradas al respecto y en la mayoría de los países del mundo la tipificación de lavado es más limitada. Es notable que en muchas discusiones internacionales los representantes del sector financiero se oponen vehementemente a tipificar como delito los procesos de lavado de dineros obtenidos por evasión de impuestos argumentando que ya existe una legislación que sanciona esas acciones.

En el ambiente de las zonas fronterizas de Colombia el contrabando siempre se ha aceptado como parte del paisaje económico de la región. En este caso la necesidad de lavar activos, es decir de disfrazar su origen, muchas veces no ha existido pues quienes han acumulado dinero ilegalmente, no han tenido que utilizar un proceso de lavado para disfrutar sus capitales debido a que las normas sociales permiten invertirlos sin riesgo de confiscación y expropiación.

⁹³ Para una ampliación de las definiciones y de los delitos de lavado véase “Reglamento modelo sobre delitos de lavado relacionados con el tráfico ilícito de drogas y otros delitos graves”. Comisión Interamericana para el control del abuso de drogas CICAD. Secretaria General Organización de los Estados Americanos. Washington 2005.

En las fronteras la debilidad de las instituciones desde la familia y la comunidad hasta el Estado, ha dado lugar al nacimiento de instituciones no formales⁹⁴ como el narcotráfico y el contrabando, que han sido u obstáculo a la hora de establecer lazos de cooperación regional -lícita- en el plano comercial, financiero y de seguridad. El contrabando y el lavado de activos en las fronteras están generalizados y toman formas muy diversas. En la prensa y la radio regional se encuentran frecuentemente afirmaciones respecto a que en las fronteras el contrabando es natural. Dichas prácticas parten de la ambigüedad entre lo que se considera ilegal y legítimo. En las ciudades visitadas la siembra de coca, por parte de los campesinos se considera legítima en la medida en que representa un ingreso para sobrevivir. En realidad cuando la presencia estatal y el ejercicio de la soberanía nacional de parte del estado son débiles, el imperio de la ley no puede ser fuerte y el conflicto entre los comportamientos de jure y de facto se expande dentro de la sociedad.

Al estudiar las fronteras y el papel del comercio que pasa por ellas en el lavado de activos, es importante separar los flujos de capital que se invierten en las fronteras, los que pasan por ellas, las medidas que se podrían tomar para controlar el comercio ilícito y las características de cada frontera que facilitan o limitan esas actividades.

Por las zonas fronterizas de Maicao, Cúcuta e Ipiales pasa contrabando cuyos mercados están en los centros urbanos más grandes del país. En este caso, aunque no todo el contrabando se financia con dineros ilegales y los dineros lavados no se invierten en las fronteras, estas juegan un papel clave en el control del lavado. En estas zonas las políticas de control al contrabando y al lavado

⁹⁴ Las instituciones no formales se entienden como el tipo de prácticas continuadas por parte de una población independientemente de su moralidad, legitimidad o legalidad. Características de este comportamiento son las sociedades débiles en las que el aparato coercitivo (castigos psicológicos, pecuniarios o penales, entre otros) son insignificantes frente al agravio cometido. En ese sentido, el irrespetar una norma no conlleva a consecuencias que constriñan a la persona de volver a hacerlo y por lo tanto las personas dentro de una sociedad sin controles tienden a hacer de las prácticas ilegales – robos, tráfico ilícito y corrupción - su forma de vida.

coinciden puesto que la confiscación de artículos ingresados ilegalmente al país contribuye a la lucha contra el lavado.

En la Guajira, donde el contrabando es una actividad ilegal pero legítima. Como se explicó anteriormente, los indígenas Wayuu han hecho del contrabando su principal actividad económica. En los 2.219 kilómetros de la frontera con Venezuela el contrabando de combustible vendido por “pimpineros” es una actividad cotidiana. Sin embargo, la regulación que emana desde el gobierno central respecto al lavado de activos parece no afectar de manera significativa los flujos comerciales fronterizos del contrabando.

Las oportunidades para lavar activos en las fronteras son amplias debido a la estructura de las sociedades fronterizas. La tradición de contrabando en esas zonas ha creado una cultura de evasión de impuestos y ha permitido la acumulación de fortunas considerables fuera del tráfico en bienes ilegales. Por eso, en esas zonas cuando alguien ha acumulado un capital considerable no es evidente que este hay estado relacionado con el tráfico de drogas. Además en las fronteras hay muchas personas con doble ciudadanía y con inversiones en ambos lados de la frontera. Esto facilita el lavado porque cualquier lucha contra el lavado requiere una cooperación muy estrecha entre agencias gubernamentales de los dos países y porque pueden surgir conflictos jurisdiccionales en cualquier juicio. Por eso, los colombianos con capitales acumulados ilegalmente, aunque no sean resultado del narcotráfico han invertido en los países vecinos, principalmente Venezuela y Ecuador. Las inversiones en este último país se han facilitado además desde que el Ecuador adoptó el dólar estadounidense como su moneda.

En los puntos fronterizos de Colombia con Venezuela, como La Guajira, Norte de Santander y Vichada, no se percibe hoy inversión del narcotráfico para lavar activos como se vio a mediados de los ochenta y principios de los noventa. Lo que existe es una gran inversión en suelo venezolano, especialmente en el Estado de Zulia, y se observa un auge de nuevas mansiones y edificios en San Cristóbal,

Maracaibo y Puerto Cabello, al oriente de Venezuela, de donde sale la droga por mar para Europa.

Los narcotraficantes están invirtiendo en suelo venezolano en parte por los menores controles que el gobierno vecino aplica a los inversionistas extranjeros. La mayor experiencia de Colombia con el narcotráfico le ha permitido al país que sea líder regional en cuanto a la legislación en esta materia y al poder de convocatoria de reuniones sobre control financiero y cooperación interinstitucional en el hemisferio. La estrategia venezolana frente al lavado de activos ha sido diferente a la colombiana. En el marco mundial, el análisis financiero y los sistemas de control frente al lavado de activos fueron creados por el Grupo de Acción Financiera Internacional –GAFI- con secciones regionales como el GAFISUD (para los países suramericanos) al que Colombia pertenece. Sin embargo, Venezuela adhirió al GAFIC (para los países caribeños) afirmando su identificación más con el Caribe y menos con la región Andina en particular y Suramérica en general, lo que hace que la cooperación binacional sobre este tema sea particularmente difícil. Además, la gran mayoría de los países miembros de GAFIC tienen y fomentan los paraísos financieros. Algunos tienen zonas francas y muchas industrias de maquila que facilitan los procesos de lavado. Esto implica que la escogencia de afiliación a GAFIC puede implicar una actitud más laxa hacia el lavado que la colombiana.

La cooperación en el control al lavado de activos con los países vecinos supone una coordinación más compleja entre autoridades financieras y requiere un nivel de desarrollo similar de los instrumentos de análisis financiero y de regulación del secreto bancario. Además exige una mayor coordinación de políticas económicas, que se dificulta por la divergencia de posturas frente a la cooperación con los Estados Unidos en los casos de Venezuela y Ecuador.

No todo el dinero que se lava es producto del narcotráfico, puede venir de cualquier actividad ilícita como la corrupción, la trata de blancas o la evasión de

impuestos. En ese sentido, un avance que se ha hecho es desnarcotizar el lavado de activos, con el objeto de buscar una regulación mundial para abordarlo de manera integral (financiación del terrorismo, trata de blancas, paraísos fiscales y contrabando, entre otros temas).

Otro factor que ha dificultado la desarticulación de las redes financieras del narcotráfico ha sido el tema del contrabando, en la medida en que no se encuentra encadenado al lavado de activos, convirtiéndose este vacío normativo en terreno fértil para las actividades ilícitas. La costa atlántica y específicamente el área de Maicao ha sido una zona reconocida por el contrabando de licor, armas y cigarrillos. En la década de los setenta, el intercambio de marihuana por telas y electrodomésticos, principalmente con Panamá, facilitó el inicio del lavado de activos del narcotráfico, gracias a la poca regulación por parte del gobierno panameño y la falta de presencia institucional colombiana. Hoy en día el contrabando se ha trasladado también a Uribia y Manaure (en Guajira), donde las mercancías gozan de régimen preferencial con IVA de 6%, regulados por la Ley 190/95. No obstante, tanto paramilitares como guerrilleros que poseen capitales abundantes provenientes de las drogas ilícitas compran contrabando, en una suerte de trueque, que exportan seguidamente a ciudades venezolanas para quitarle el rastro ilícito a la mercancía⁹⁵.

En la frontera con el Ecuador se repiten ciertas características frente a las dificultades del control al lavado de activos. La falta de presencia estatal, la desconfianza mutua y la falta de mecanismos de cooperación fronteriza⁹⁶ también dificultan las tareas del gobierno. Un aspecto que diferencia las dinámicas de lavado y específicamente de inversión con dineros ilícitos (principalmente de narcotráfico) es la modalidad de inversión. Los empresarios colombianos que migraron hacia Venezuela a principios de los años noventa lo hicieron porque

⁹⁵ Apartes de la entrevista a un funcionario público de la Alcaldía de Riohacha. Riohacha, Guajira. Septiembre 1 de 2005.

⁹⁶ Alcides Costa Vaz, "El conflicto colombiano: una perspectiva global". En Martha Ardila, Diego Cardona y Socorro Ramírez, Colombia y su política exterior en el Siglo XXI. Bogotá: Fondo Editorial CEREC- Fescol, 2.005. Páginas 27-59.

encontraron en ese país estabilidad legislativa, rendimientos económicos y menores controles, es decir, se caracterizó por la entrada de capitales lícitos en nuevas actividades económicas. Por el contrario, por la información obtenida en las entrevistas en Putumayo y Nariño, los empresarios colombianos legales han invertido menos en Ecuador, por lo que el aumento de la inversión en este país en negocios lícitos tradicionales, muchos de los cuales estaban afectados por la crisis política, fue el destino indicado para que narcotraficantes colombianos limpiaran sus capitales, aprovechando la inexistencia de un control financiero efectivo. Uno de los retos para el rastreo del dinero de lavado de activos de Colombia hacia el Ecuador es la dolarización de la economía de ese país que ha facilitado el lavado.

La generalización de este fenómeno en el imaginario ecuatoriano ha llevado a calificar a priori como ilícitas todas las inversiones provenientes de colombianos en ese país, lo que ha creado un clima de desconfianza al punto que, tanto Colombia como sus ciudadanos, sean considerados como una amenaza regional, convirtiendo el adjetivo “colombianizar” en sinónimo de conflicto armado, militarización, fumigación e intervención.

4. Conclusiones y sugerencias de políticas públicas

4.1. Conclusiones

Las conclusiones principales que se desprenden del estudio sobre el narcotráfico en las fronteras terrestres son las siguientes:

4.1.1. Cada una de las regiones fronterizas colombianas presenta problemas distintos frente al narcotráfico y amerita, por tanto, la adopción de políticas diferenciadas. En Cúcuta e Ipiales, por ejemplo, pueden fortalecerse y modernizarse las aduanas, pues existe un activo comercio fronterizo, mientras no tendría sentido hacerlo en Puerto Carreño o Mitú, con un comercio muy reducido. Es distinto el caso de las colonizaciones coqueras de frontera, que exigen definir

políticas agrarias y de ocupación territorial, pues estas regiones no son rentables para el Estado ni la economía legal, pero sí lo son, por su aislamiento, para la industria del narcotráfico y los para-estados armados..

4.1.2. Después de la destrucción de los grandes carteles de los años ochenta y noventa, las pequeñas empresas acopiadoras y exportadoras de drogas no están en capacidad de financiar estructuras armadas propias y han tenido que recurrir a las organizaciones armadas que ejercen control territorial. Por tanto, el eje de poder del narcotráfico se ha desplazado hacia las estructuras armadas de las guerrillas y los paramilitares, que controlan los territorios del negocio, esto es, los campos de cultivo y las áreas donde se localizan los laboratorios de cristalización, y que acopian y venden las drogas a empresarios del narcotráfico especializados en el transporte y la comercialización en el exterior.

4.1.3. Ese cambio del negocio también ha implicado una nueva organización del mercado de la base de coca y una mayor subordinación para los cultivadores, que ahora proveen a grupos armados que buscan asegurar sus compras con una combinación de relaciones comerciales y coacción contra la población campesina. Mientras hay pocos combates entre guerrillas y paramilitares, ambos usan la violencia contra la población para controlar el abastecimiento propio y desestimular el del adversario.⁹⁷

4.1.4. La parcial desmovilización de grupos paramilitares vinculados con el narcotráfico ha sido compensada con la aparición de nuevos grupos armados, integrados con quienes no se desmovilizaron o con nuevos reclutas, que siguen

⁹⁷ “Las regiones fronterizas se han convertido no sólo en centros de procesamiento de droga y en lugares de tránsito de cocaína y heroína refinadas, armas y municiones, sino también en blanco de grupos armados y carteles de droga rivales. Para los residentes de dichas regiones, la participación en actividades ilícitas muchas veces es la única alternativa real que tienen frente a la extrema pobreza. O se dedican a los cultivos ilícitos y se los venden al grupo que controle la zona, o son asesinados, o se unen a los millones de colombianos, en su mayor parte campesinos, que han huido a los grandes centros urbanos o al exterior.” En **Las Fronteras de Colombia: el Eslabón Débil de la Política de Seguridad de Uribe**, ICG, Informe sobre América Latina No. 9, 23 de Septiembre de 2004

controlando territorios del narcotráfico. Son los casos de Norte de Santander, Vichada, Putumayo y Nariño.

4.1.5. La lucha contra el narcotráfico mediante fumigaciones aéreas en algunas regiones, como Putumayo y Guaviare, ha desplazado los cultivos y la población de cultivadores hacia la periferia de colonización, más cerca de las fronteras, como Vichada, Guainía, Vaupés, Amazonas y Nariño, y en algunos casos, hacia los países vecinos, como la Sierra de Perijá en Venezuela y las provincias de Napo y Esmeraldas en Ecuador. A medida que la colonización se aleja del mercado interno, los nuevos territorios son cada vez menos rentables para el Estado y más rentables para las organizaciones para-estatales que dependen financieramente del narcotráfico.

4.1.6. En las fronteras terrestres integradas económicamente a los países vecinos, como Cúcuta e Ipiales, el narcotráfico usa la infraestructura del comercio fronterizo, y en aquellas no integradas, aisladas tanto del mercado interno como del exterior, el narcotráfico hace avanzar la ocupación territorial lejos de la presencia del Estado y de la dotación de infraestructura del país, con grave impacto ambiental y social para las poblaciones afectadas.

4.1.7. La expansión de los cultivos ilícitos afecta tres tipos de territorios: a) los ocupados por minorías indígenas o afro-descendientes, que pierden la tierra y son desplazados o subordinados al negocio; b) los parques nacionales y reservas naturales constituidas, que son deforestados para la siembra y contaminados por el procesamiento; y c) las tierras baldías no colonizadas de la amazonia y la orinoquia, donde se produce también grave daño ambiental y se avanza en la ocupación antieconómica del territorio con usos ilícitos o inadecuados del ecosistema.

4.1.8. La industria del narcotráfico está en el proceso de afianzar rutas y redes de negocios en todos los países vecinos de Colombia: hay laboratorios y cultivos de

coca y amapola en Venezuela, laboratorios en Brasil y laboratorios y cultivos de coca en Perú y Ecuador. En todos los casos se percibe, desde la frontera colombiana, una notable debilidad de los controles policiales en los países vecinos, que facilita el éxito de los embarques de drogas.

4.1.9. Venezuela ha decidido adoptar una política independiente de lucha contra el narcotráfico, sin aceptar la tutela de los Estados Unidos, y percibe con desconfianza la estrecha cooperación de Colombia con los Estados Unidos. A partir de la captura de Rodrigo Granda, de las FARC, en noviembre de 2004, y su entrega a las autoridades colombianas en Cúcuta, la cooperación de las autoridades venezolanas con la policía colombiana se ha reducido al mínimo posible.

4.1.10. En Ecuador se ha desarrollado una red de rutas y contactos para el paso de las drogas por su territorio con destino al océano Pacífico, y están dadas las condiciones para una vigorosa expansión de los cultivos ilícitos en sus regiones amazónica y andina. Su gobierno rechaza las fumigaciones cercanas a su frontera y protesta por las operaciones militares de la región fronteriza que afectan su territorio. Ecuador percibe el problema como un desbordamiento de los conflictos colombianos que Colombia no ha sabido impedir y deja de percibir el carácter global del narcotráfico y la debilidad de sus condiciones internas que facilitaron la expansión hacia ese país.

4.1.11. El lavado de activos a través de las fronteras terrestres tiende a usar poco el sistema financiero y prefiere la inversión en bienes reales, como finca raíz, bienes suntuarios y contrabando, muchas veces en los países vecinos. Un problema que dificulta el control del lavado de activos es la discrepancia entre la ley y la legitimidad social de ciertas prácticas ilegales, como el contrabando y el narcotráfico, que vuelve más permisiva a la sociedad frente al enriquecimiento súbito. Otra dificultad real proviene del desarrollo insuficiente de sistemas de coordinación de las autoridades financieras con sus homólogas en los países

vecinos y, en el caso de Ecuador, la dolarización de su economía, que hace innecesaria la conversión de dólares a moneda local para realizar inversiones en el sector real.

4.2. Sugerencias de políticas públicas

4.2.1. Las autoridades que aplican la política de lucha contra el narcotráfico deben diferenciar entre los campesinos cultivadores y los narcotraficantes. Mientras los campesinos cultivan para sobrevivir en un entorno económico hostil que no ofrece alternativas, los narcotraficantes buscan el lucro excesivo explotando el sobreprecio de la droga derivado de su ilegalidad. Mientras los narcotraficantes ejercen dominios regionales, los campesinos son subordinados a los señores de la guerra. Así, por ejemplo, las autoridades deben tener en cuenta, en sus tratos con los campesinos cultivadores, que éstos están sometidos a la coacción armada de grupos paramilitares y guerrillas, que los sancionan con el desplazamiento o la violencia si se rehúsan a proveerlos de drogas. La aplicación de la política criminal del Estado debe considerar la sustitución de la seguridad estatal por la de grupos armados ilegales como circunstancia atenuante de la responsabilidad penal para los cultivadores campesinos, puesto que les reduce drásticamente la libertad de elección frente a los cultivos.

4.2.2. Los grupos paramilitares no desmovilizados y los nuevos grupos encargados del negocio del narcotráfico deben ser tratados por el Estado como organizaciones del crimen organizado y no pueden ser beneficiarios de la ley de justicia y paz, que cobijó a quienes, a pesar de controlar negocios de narcotráfico, fueron aceptados por el gobierno como rebeldes políticos para efectos de la negociación de paz.

4.2.3. El Estado debe estudiar y definir una política para frenar la expansión de la frontera agraria por la vía de los desplazamientos de cultivos ilícitos a zonas distantes del mercado y la presencia estatal. La decisión política de fondo que

debería adoptar el país es la de cerrar la expansión de la frontera agropecuaria para todo tipo de colonización, como parte de una política agraria que busque resolver los conflictos de uso del suelo existentes. El país no necesita incorporar nuevas tierras sin vocación productiva, con alto costo ambiental, mientras una tercera parte de la extensión agropecuaria incorporada al mercado y la infraestructura se encuentra actualmente subutilizada.⁹⁸ Elementos necesarios de esa política son los siguientes:

- Creación de nuevos parques nacionales y reservas naturales y protección efectiva de los actuales, donde no pueda haber cultivos ilícitos ni asentamientos humanos, que cubran una parte sustancial de las regiones despobladas de la amazonia y orinoquia, con el fin de cerrar la frontera agropecuaria y proteger el patrimonio ambiental de la humanidad y las generaciones futuras.
- Protección efectiva de los resguardos y reservas indígenas de la amazonia y la orinoquia y de los territorios comunitarios afro-colombianos del litoral pacífico contra la ocupación de sus tierras por los cultivadores de productos ilícitos.
- Relocalización voluntaria y pactada de cultivadores ilícitos desde zonas periféricas de colonización coquera hacia regiones integradas al mercado agropecuario. Equivaldría a un intercambio de erradicación voluntaria por tierra, como un complemento a los programas de desarrollo alternativo.
- Aumento de la inversión pública en las áreas de destino donde se relocalice a cultivadores ilícitos y disminución de la inversión pública allí donde se quiera desincentivar la colonización coquera.

4.2.4. A largo plazo, la política más eficaz contra el narcotráfico es atacar el eslabón final de la cadena, la meta de toda la actividad empresarial de las drogas,

⁹⁸ La prueba concluyente sobre los conflictos de uso del suelo en Colombia se encuentra en el Atlas de Colombia, edición 2002, publicado por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, en los mapas titulados "Cobertura vegetal y uso" (p. 168), "Vocación de uso de la tierra" (p.170) y "Conflictos de uso" (p. 171).

que es la ganancia acumulada, mediante el control al lavado de activos y la extinción del dominio. Al hacerlo se debilita la base financiera de los narcotraficantes y se envía una señal fuerte para disuadir a quienes pretendan enriquecerse ilícitamente. La extinción de dominio debe ser legitimada socialmente mediante una política racional de destinación de los bienes, especialmente las tierras rurales y propiedades urbanas, para los fines prioritarios de la política social del país.

4.2.5. La política fronteriza con los países vecinos respecto del narcotráfico debe tener en cuenta la asimetría existente entre la experiencia acumulada por Colombia en la lucha contra el narcotráfico, frente a la inexperiencia de los países vecinos, con excepción del Perú, que también cuenta con ella. En ese sentido, las autoridades colombianas deben contribuir con asistencia técnica especializada a sus contrapartes en los países fronterizos para que sus gobiernos puedan lograr los desarrollos institucional y normativo necesarios para hacer frente con éxito al narcotráfico.⁹⁹

4.2.6. La Cancillería colombiana debe procurar, por medios diplomáticos, que Venezuela recupere la confianza perdida y restablezca niveles aceptables de cooperación e intercambio de inteligencia con las autoridades encargadas de la lucha contra el narcotráfico.

4.2.7. Colombia debe definir una política de repatriación de campesinos cultivadores colombianos desplazados hacia Ecuador por el conflicto armado y las fumigaciones, ofreciéndoles condiciones de seguridad y posibilidades de desarrollo.

⁹⁹ “Colombia no podrá resolver su conflicto sin el decidido apoyo de Ecuador y Venezuela. Para obtener dicho apoyo, tendrá que tomar en serio las inquietudes y necesidades de sus vecinos y ofrecerles una genuina cooperación en la planeación y ejecución de actividades tanto militares como antinarcóticos, así como en programas de desarrollo en las zonas fronterizas sensibles.” En **Las Fronteras de Colombia: El Eslabón Débil de la Política de Seguridad de Uribe**, ICG, Informe sobre América Latina No. 9, 23 de Septiembre de 2004, p. 3.

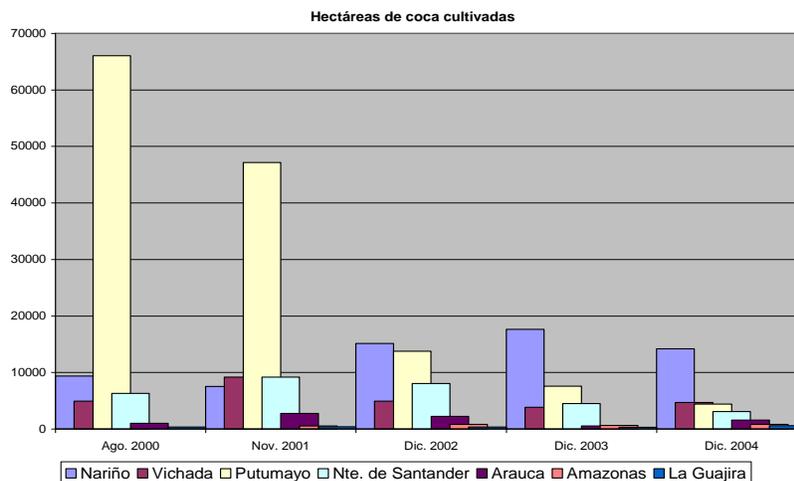
Anexos

Tabla 1

Cultivos de coca por Departamento, 2000-2004 (Hectáreas)						
Departamento	Ago. 2000	Nov. 2001	Dic. 2002	Dic. 2003	Dic. 2004	Porcentaje del total de Hectáreas cultivadas en 2004
Nariño	9343	7494	15131	17628	14154	17,6%
Vichada	4935	9166	4910	3818	4692	5,8%
Putumayo	66022	47120	13725	7559	4386	5,5%
Nte. de Santander	6280	9145	8041	4471	3055	3,8%
Arauca	978	2749	2214	539	1552	1,9%
Amazonas		532	784	625	783	1,0%
La Guajira	321	385	354	275	556	0,7%
Total en Colombia	162510	144807	102071	86340	80350	

Fuente: Naciones Unidas, Oficina Contra la Droga y el Delito "Colombia, Censo de Cultivos de Coca", Junio de 2005.

Gráfico 1



Fuente: Naciones Unidas, Oficina Contra la Droga y el Delito "Colombia, Censo de Cultivos de Coca", Junio de 2005.

Bibliografía

Agencia EFE “**Canciller el Ecuador cuestiona el Plan Colombia por intervención de EEUU**”. Periódico El Deber en línea. Martes 6 de Septiembre de 2.005. Disponible en: <http://www.eldeber.com.bo/antecedentes/20050906/al7.html>

Alcides Costa Vaz, “**El conflicto colombiano: una perspectiva global**”. En Martha Ardila, Diego Cardona y Socorro Ramírez, Colombia y su política exterior en el Siglo XXI. Bogotá: Fondo Editorial CEREC- Fescol, 2.005. Páginas 27-59.

Andrés López Restrepo y Miguel Ángel Hernández Arvelo, “**Colombia y Venezuela frente al narcotráfico**”, en Socorro Ramírez y José María Cadenas, eds., Colombia-Venezuela, agenda común para el siglo XXI. Tercer Mundo Editores

Andrés Peñate, de Andrés Peñate, **Oil and Politics in a Colombian Province**, Oxford, 1989, tesis inédita de Maestría en Historia.

Carta informativa de ECOPETROL 2002. www.ecopetrol.com.co

Caso de los “Mellizos Mejía” un ejemplo de las dificultades que podría enfrentar la “ley de paras”. El Tiempo, Marzo 5 de 2006.

Departamento Nacional de Planeación (2002) “**Información Básica Departamental, Amazonas**”, DNP, República de Colombia, Noviembre de 2002.

Departamento Nacional de Planeación (2003) “**Información Básica Departamental, Arauca**”, DNP, República de Colombia, Julio 17 de 2003. En: http://www.dnp.gov.co/paginas_detalle.aspx?idp=92

Departamento Nacional de Planeación (2003) “**Información Básica Departamental, Guajira**”, DNP, República de Colombia, Abril de 2003. Disponible en http://www.dnp.gov.co/paginas_detalle.aspx?idp=107

Departamento Nacional de Planeación (2003) “**departamento de Nariño: situación económica, social, financiera y sectorial: Evolución de los principales indicadores**”, DNP, República de Colombia, Mayo de 2003.

Departamento Nacional de Planeación (2002) “**Información Básica Departamental, Norte de Santander**”, DNP, República de Colombia, Agosto de 2002. En: http://www.dnp.gov.co/paginas_detalle.aspx?idp=111

Departamento Nacional de Planeación (2003) “**Información Básica Departamental, Putumayo**”, DNP, República de Colombia, Agosto de 2003.

En: http://www.dnp.gov.co/paginas_detalle.aspx?idp=112

Departamento Nacional de Planeación DNP **“Información Básica Departamental, Vichada”**, República de Colombia, Abril 2003. Disponible en http://www.dnp.gov.co/paginas_detalle.aspx?idp=107

Diario El Nacional, Caracas, jueves 10 de noviembre 2005.

“En Arauca nuevos resultados contra el narcotráfico” Fuerzas Militares de Colombia Ejército Nacional. Disponible en: <http://www.ejercito.mil.co/index.php?idcategoria=84984> Septiembre 6 de 2005.

Francisco Thoumi **“Legitimidad, lavado de activos y divisas, drogas ilegales y corrupción en Colombia”**, en *Ensayo y error*. Vol. 1, No. 1, noviembre, 1996.

Fundación Ideas para la Paz, Análisis, **“La tercera Generación”**, en Siguiendo el conflicto: hechos y análisis de la semana“. Número 25. Agosto 12 de 2005

En: http://www.dnp.gov.co/paginas_detalle.aspx?idp=90

Fundación de Ideas para la Paz, **“Siguiendo el conflicto: hechos y análisis de la semana”**, Número 25. Agosto 12 de 2005

Instituto Geográfico Agustín Codazzi, Atlas de Colombia, edición 2002, mapas titulados **“Cobertura vegetal y uso”** (p. 168), **“Vocación de uso de la tierra”** (p.170) y **“Conflictos de uso”** (p. 171).

Instituto Nacional de Estadística e Informática - INEI, Banco de Información Distrital. Perú. Disponible en, <http://desa.inei.gob.pe/mapas/bid/>

“La OXY vuelve a invertir en Colombia. US\$ 80 millones para mantener activo a Caño Limón” Presidencia de la República de Colombia. Disponible en <http://www.presidencia.gov.co/cne/2003/julio/15/14152003.htm> Julio 15 de 2003

Las fronteras de Colombia: el eslabón débil de la política de seguridad de Uribe, Internacional Crisis Group –ICG-, Informe sobre América Latina No. 9, 23 de septiembre de 2004, Quito-Bruselas.

“Los Mellizos el mayor clan de Narcotráfico desde Pablo Escobar”. En Bel Ibérica. Disponible en: <http://www.belt.es/noticias/2004/febrero/13/mellizos.htm>

Marcela Ceballos **Plan Colombia: Contraproductos y Crisis Humanitaria. Fumigaciones y Desplazamiento en la Frontera con el Ecuador**. Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento –CODHES- Octubre 2.003

En: http://www.dnp.gov.co/paginas_detalle.aspx?idp=110

Observatorio de Derechos Humanos de la Vicepresidencia de la República de Colombia. **“Algunos Indicadores sobre la situación de Derechos Humanos a**

Septiembre de 2004 en el Departamento de Arauca". Disponible en en <http://www.derechoshumanos.gov.co/observatorio/indicadores/2004/indicadoresarauca.pdf>

Observatorio de Drogas de Colombia. **Acciones y Resultados 2003**. Sección 4.3."Tráfico y control de sustancias químicas en Colombia" DNE, Ministerio del Interior y de Justicia 2004.

"Operaciones ofensivas en Arauca. Mueren dos terroristas de las FARC". Ejército Nacional. Abril 25 de 2005. Disponible en: <http://www.ejercito.mil.co/index.php?idcategoria=77020>

"Reglamento modelo sobre delitos de lavado relacionados con el tráfico ilícito de drogas y otros delitos graves". Comisión Interamericana para el control del abuso de drogas CICAD. Secretaria General Organización de los Estados Americanos. Washington 2005.

Ricardo Vargas Meza **Narcotráfico, Guerra y Política Antidrogas. Una perspectiva sobre las drogas en el conflicto armado colombiano**. Acción Andina 2005.

Sam Logan, **Guns, Cocaine: One Market Out Of Control**, International Relations and Security (Zurich), <http://www.isn.ethz.ch/news/sw/details.cfm?id=14921>

Seminario Internacional Narcotráfico: Debate relegado, política agotada. Fundación Agenda Colombia y Contraloría General de la República. Bogotá, Jueves 27 de Octubre de 2005.

Relación de entrevistas de campo, en archivo, Centro Observatorio de Drogas y Delito, Facultad de Economía, Universidad del Rosario:

Entrevista a Capitán, SIJIN Riohacha. Agosto 31 de 2005

Entrevista a Secretario de Gobierno, Alcaldía de Riohacha. Septiembre 1 de 2005.

Entrevista a Oficial DAS, Riohacha. Septiembre 1 de 2005.

Entrevista a Coronel SIJIN Cúcuta. Agosto 22 de 2005.

Entrevista a funcionario DAS Cúcuta. Agosto 23 de 2005.

Entrevista a funcionario DIAN Cúcuta. Agosto 23 de 2005.

Entrevista a funcionario DAS, Arauca. Febrero 23 de 2006.

Entrevista a Fiscal especializada, Arauca. Febrero 23 de 2006

Entrevista a SIJIN Arauca. Febrero 23 de 2006.

Entrevista a Oficial ejército Brigada XVIII. Febrero 23 de 2006.

Entrevista a Oficiales SIJIN y Policía Judicial, Puerto Carreño Septiembre 22 de 2005

Entrevista a funcionario INCODER, Puerto Carreño. Septiembre 22 de 2005.

Entrevista a Fiscal especializado. Puerto Carreño. Septiembre 23 de 2005.

Entrevista a Comandante Brigada 26 Selva, Leticia. Septiembre 14 de 2005.

Entrevista a Comandante de Policía. Leticia. Septiembre 14 de 2005.

Entrevista a Párroco, Leticia. Septiembre 15 de 2005.

Entrevista a otro Párroco, Leticia. Septiembre 16 de 2005

Entrevista a Profesor Universidad Nacional, Leticia. Septiembre 16 de 2005

Entrevista a funcionario DIAN, Leticia. Septiembre 16 de 2005.

Entrevista a Cónsul colombiano en Tabatinga, Brasil. Septiembre 18 de 2005

Entrevista a funcionario Chemonics, Puerto Asís. Octubre 5 de 2005.

Entrevista a Comandante de policía, Puerto Asís. Octubre 5 de 2005.

Entrevista a Representantes SIJIN, SIPOL, Fiscalía y CTI. Octubre 6 de 2005.

Entrevista a Alcalde Puerto Asís. Octubre 6 de 2005.

Reunión con representantes de la sociedad civil, Puerto Asís. Octubre 6 de 2005.

Entrevista a Oficial CTI, Ipiales. Octubre 3 de 2005.

Entrevista a Director SIJIN departamental, Ipiales. Octubre 3 de 2005.

Entrevista a Secretario de Gobierno, Alcaldía Municipal, Ipiales. Octubre 4 de 2005.

Entrevista a Oficial ejército Ipiales. Octubre 4 de 2005.

Entrevista a Alcalde Tulcán, Ecuador. Octubre 4 de 2005.

Entrevista a Comandante DIJIN, Bogotá, Agosto 5 de 2005

Entrevista a Subdirector Fiscalización aduanera DIAN, Bogotá, Agosto 10 de 2005.

Entrevista a Subdirector estratégico UIAF, Bogotá, Agosto 17 de 2005.

Entrevista a Presidente Comisión tercera (seguridad - drogas ilícitas) Comunidad Andina, Bogotá, Agosto 29 de 2005.

Entrevista a Director Chemonics - Fundacad USAID, Bogotá, Agosto 29 de 2005.

Entrevista a funcionaria Cancillería, Dirección de asuntos políticos multilaterales, Bogotá, Septiembre 15 de 2005.